

El culto y la cultura en los inmuebles catalogados de la Iglesia católica en España

Carmen Serrano de Haro

2015

CUADERNOS DE DERECHO DE LA CULTURA nº 8

Director de la colección:

Marcos Vaquer Caballería (UC3M)

Consejo Editorial:

Icíar Alzaga Ruiz (UNED)

Domenico D'Orsogna (Università di Sassari, Italia)

Javier García Fernández (UCM)

Luciano Parejo Alfonso (UC3M)

Francisco Piñón (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina)

Jesús Prieto de Pedro (UNED)

Honorio Velasco Maíllo (UNED)

Secretaria de redacción:

Raquel Rivera

Cuadernos de Derecho de la Cultura quiere ser un portal abierto para la difusión de los mejores trabajos de investigación que se desarrollan en el seno del Instituto, así como de otros estudios y colaboraciones externas que merezcan ser publicados. Para garantizar su calidad, los originales cuya publicación se nos proponga serán sometidos a una evaluación ciega por pares. Con objeto de favorecer su máxima difusión y visibilidad, se ofrece en acceso abierto en el repositorio institucional de la Universidad Carlos III, *e-Archivo*, bajo una licencia *Creative Commons*, de modo que estos *Cuadernos* sean accesibles a todos en todas partes.



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons
Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada

Disponible en e-Archivo: <http://hdl.handle.net/10016/22044>

Edita:

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN CULTURAL
UC3M-UNED

C/Madrid 126, 28903 Getafe (Madrid) España

Despacho 11.2.04 Correo-e: icultura@pa.uc3m.es

Tel.: (+34) 91 624 57.81 Fax: (+34) 91 624 57.37

<http://www.uc3m.es/iicc>

ISSN: 2340-8103

ÍNDICE

	Pág.
Introducción	6
I. Los valores asociados	8
I.1. El contenido de los conceptos	8
I.1.i. El valor cultural	9
a) Reflexiones en torno a lo histórico y lo artístico	9
b) Reflexiones en torno a lo cultural	15
I.1.ii. El valor de culto	27
I.2. La confluencia de valores	38
a) Valores en competencia	38
b) Valores complementarios	45
II. El conflicto jurídico de valores	53
II.1. Régimen jurídico de los bienes en el derecho canónico	53
II.1.i. La calificación jurídica de los bienes temporales de la iglesia	55
a) La titularidad de los bienes	55
b) Los tipos de bienes	56
II.1.ii. Las facultades dominicales	57
a) Los regímenes jurídicos	57
b) Las normas de disposición y de enajenación	57
II.2. Marco jurídico actual	59
II.2.i. i. En el derecho comparado	59
II.2.ii. ii. En el derecho español	61
II.3. Aportaciones de la jurisprudencia	74
III. Conclusión	80
Bibliografía	85

Resumen

El presente artículo estudia la confluencia del valor de culto y del valor cultural en inmuebles catalogados como bienes de interés cultural en propiedad y posesión de la Iglesia Católica. Tras un análisis de la evolución hasta el significado presente del valor cultural y de sus componentes históricas y artísticas así como del valor de culto, desde la formación de un patrimonio asignado al mismo a las consideraciones actuales, se reflexiona sobre la convivencia entre ambos conceptos de valor cuando coinciden en la misma realidad construida.

El examen del marco jurídico de la regulación en el derecho canónico, en el derecho comparado y en el derecho español y la investigación en torno a las cualidades intrínsecas de la arquitectura sirven de base para aportar soluciones a los posibles conflictos.

Palabras clave

Valor cultural, valor de culto, valor neutro, valor sostenible, patrimonio histórico artístico

Abstract

This article examines the convergence of a worship value and a cultural value in buildings listed as heritage which are in ownership and possession of the Catholic Church. After an analysis of the evolution towards the current meaning of cultural value and its historical and artistic components as well as the value of worship, from the formation of heritage specifically for cultural means to modern-day considerations, there follows a reflection about the coexistence of both when they appear in the same constructed reality.

The study of the legal framework of regulation in Canon Law, Comparative Law and Spanish Law alongside an investigation about the intrinsic qualities of Architecture provides a bedrock on which possible solutions to possible conflicts can be built.

Key words

Cultural value, worship value, neutral value, sustainable value, artistic and historical heritage

Introducción

Las circunstancias de la historia y el devenir de los siglos en el territorio geográfico europeo han conducido a que muchos de los bienes inmuebles incluidos en el elenco del patrimonio histórico artístico de los Estados y catalogados por estos como bienes culturales, con la trascendencia técnica y jurídica que tal consideración conlleva, sean edificios con un uso religioso, particularmente el católico.

Son bienes en los que confluye un valor cultural, determinado por imperativo legal a causa de las características, históricas siempre y artísticas por añadidura en algunos supuestos, del edificio y un valor de culto cuyo alcance determina la confesión religiosa en tanto bien eclesiástico y que porta, a su vez, el patrimonio inmaterial de los ritos asociados.

La acción conjunta de estos intangibles valores contamina las potestades vulgares derivadas de la propiedad del inmueble y atrae en torno a él a un confuso condominio de detentadores de derechos de diferentes rangos que lo sustraen del comercio común, determinan notoriamente su régimen legal y abren la polémica doctrinal y jurídica sobre las facultades demaniales de uso y disfrute del inmueble.

Ambos valores se protegen tras principios jurídicos que, reconocidos en mayor o menor medida en las legislaciones nacionales y en los instrumentos internacionales, recopilan la amplia polisemia del culto y de la cultura. En particular, la salvaguarda de esta última puede encontrarse, como ocurre en el texto constitucional español y ha minuciosamente analizado Prieto de Pedro¹, desde en principios que recogen lo que el autor denomina nociones de la cultura con diferencias cualitativas, como la noción étnica de cultura por contraposición a la noción general, hasta en aquellos que difieren en nociones de la misma cuantitativamente muy diversas.

Razones de lógica expositiva nos impiden considerar todos ellos y nos obligan a centrarnos en las versiones del principio de libertad de culto y del principio cultural que se despliegan en el inmueble de la Iglesia catalogado y que se concretan en la afectación del edificio al uso religioso en el primer caso y en su incorporación al patrimonio cultural en el segundo.

¹ PRIETO DE PEDRO, J., *Cultura, culturas y Constitución*, Madrid, Congreso de los Diputados, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pág.50 y ss.

En este sentido tectónicamente restringido, si se me permite el giro, el ordenamiento español enuncia en la misma norma fundamental el principio de garantía de la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público, en el artículo 16 y el llamado principio cultural, tanto en su aspecto de protección y promoción del patrimonio histórico artístico del artículo 46 como en el del acceso de todos los ciudadanos a la cultura del artículo 44.

Tanto el artículo 16 como los artículos 44 y 46 se encuentran en el Título I *De los derechos y deberes fundamentales* pero en capítulos distintos que presumen categorías de derechos muy desiguales. El principio de libertad de culto se incardina dentro del Capítulo Segundo *Derechos y libertades*, Sección Primera, *De los derechos fundamentales y de las libertades públicas*, en un bloque de potestades particularmente protegido. Sin embargo, el llamado principio cultural aparece en las dos versiones del mismo objeto de este estudio en el Capítulo Tercero *De los principios rectores de la política social y económica*.

Este diferente posicionamiento constitucional supone que, según el artículo 53, el principio de libertad de culto vincula a todos los poderes públicos, su contenido sólo puede regularse por ley y cualquier ciudadano que se sienta violado en su ejercicio puede recabar la tutela de los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad así como a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el reconocimiento, respeto y protección del principio de acceso a la cultura y de salvaguarda del patrimonio quedan reducidos a meros criterios informadores de la legislación positiva, de la práctica judicial y de la actuación de los poderes públicos; su defensa sólo puede alegarse ante la jurisdicción ordinaria pues son derechos de prestación positiva por el Estado dentro de la más amplia categoría del servicio público cultural.

Toda esta construcción legal viene a regular unas pretensiones y anhelos sociales previos cuyas manifestaciones en torno a un edificio analizaremos antes de reflexionar sobre el armazón jurídico en el que se articulan.

I. Los valores asociados

I.1. El contenido de los conceptos

Cultura y culto comparten en las lenguas romances² un mismo origen etimológico del verbo latino *colere- cultivar*. La voz *culto* aparece en el participio perfecto del verbo- *cultivado*; la voz *cultura* se encuentra en el participio futuro- *que ha de cultivar*. También aparece la voz *cultum* en la forma supina que indica una finalidad del verbo- *para cultivar*.

Este término *cultivar* evolucionará en la Europa del siglo XVIII en sentido metafórico hacia el significado de proceso de perfeccionamiento y elevación del espíritu.

Con derivas diferentes, los términos se siguen integrando en algunos documentos del siglo XIX. Prieto de Pedro menciona el tratado de Derecho Administrativo de Cuesta y Martín³ en el que al enumerar los fines de cultura de la Administración pública, junto a la cultura intelectual, la cultura estética, la cultura material y la cultura general, aparece el concepto de cultura moral que incluye los ritos religiosos. Esa moral que viene del latín *mos moris* significa *costumbre* y determina, por tanto, las reglas por las que se rige el comportamiento del ser humano respecto a la sociedad.

A nuestro juicio, el culto y la cultura inician andaduras divergentes para el imaginario común en el momento en el que la religión deja de ser esa costumbre aceptada y practicada por la mayor parte de los individuos y ni se identifica con la personalidad de los pueblos ni se incluye en la idea de Estado-Nación.⁴ Los conceptos se desgarran de la matriz común y pasan a enfocarse desde puntos de vista sociológicamente distintos.

² No ocurre en inglés con *worship* y *culture*. Lenguas como el castellano han separado los términos *cultura* y *cultivo* aunque sigan existiendo expresiones como el *cultivo de las artes* o el *cultivo del espíritu*. Otras, como el francés, mantienen el carácter polisémico de la voz *culture* que sigue refiriéndose tanto al concepto actual de cultura como al cultivo agrícola.

³ CUESTA Y MARTÍN, S., *Principios de Derecho Administrativo*, tomo II, Salamanca, librería Manuel Hernández, 1894, citado por PRIETO DE PEDRO, op. cit., pág. 19.

⁴ No puede afirmarse que este fenómeno haya ocurrido en todos los países; tampoco que se haya producido como consecuencia de la evolución de las mentalidades, pues depende directamente de los avatares históricos de cada nación. Incluso en ámbitos territoriales culturalmente parecidos, los países mantienen posturas muy diferentes. Hay ejemplos extremos en Europa, una Europa que comparte muchos siglos en común: mientras que Francia aboga por el laicismo cultural, Grecia cuida y conserva a la religión ortodoxa como identidad nacional del pueblo y de la nación griega.

Sin embargo, asistimos en la actualidad a una nueva confluencia entre el culto y la cultura, con la única diferencia respecto al pasado de que el culto católico no conserva el monopolio en la aproximación.

Analiza Velasco ⁵ que la tendencia «*con la que grupos, comunidades, aficionados, identidades múltiples surgidas en el fenómeno de la mundialización, han construido su identidad en buena medida mirándose en su cultura y proyectando su imagen a través de ella*» ha hecho de la diversidad cultural en la conciencia colectiva y en la normativa internacional el núcleo de la cultura.

Y dentro de este colosal marco actual significativo de cultura, resulta difícil mantener que el culto religioso católico asociado a un inmueble, en tanto manifiesto obvio de diversidad cultural, no forma parte de la amalgama protegible.⁶

Comenzaremos por un análisis separado de estos valores antes de exponer sus relaciones conflictuales.

I.1.i. El valor cultural

Múltiples ensayos, artículos, tesis se han escrito sobre el valor cultural. La limitada extensión de este estudio nos obliga a seleccionar los enfoques que influyen directamente en el diálogo entre el culto y la cultura en torno a un inmueble.

a) Reflexiones en torno a lo histórico y lo artístico

El concepto moderno de lo histórico, valga la antonomasia, nace durante el Renacimiento, cuando artistas y humanistas vuelven su mirada a la antigüedad greco-romana y encuentran en ella un modelo estético que codificará lo artístico y el rastro de una civilización que, aunque lejana, presenta similitudes múltiples con el contexto mental de ese momento. En 1415, el estudioso Poggio Bracciolini había descubierto en el

⁵ VELASCO MAILLO, H., “La cultura. Noción moderna”, *Revista Patrimonio cultural y Derecho*, nº 10, 2006, pág. 13.

⁶ España tiene incluido en la Lista del Patrimonio inmaterial de la UNESCO desde 2008, entre otros, el llamado Misterio de Elche. Se trata de un drama musical sagrado sobre la muerte, la ascensión y la coronación de la Virgen que se ha representado sin interrupción en la Basílica de Santa María de la citada ciudad desde mediados del siglo XV y constituye un testimonio vivo del teatro religioso europeo medieval y de la devoción a la Virgen. También la Lista del Patrimonio mundial acoge desde 1987 el camino de Santiago. La descripción que aparece en la página de la UNESCO indica que este itinerario, jalonado de edificios religiosos, «*sigue siendo un testimonio del poder que ejerce la fe cristiana en millones de europeos de toda condición social.*»

monasterio de San Gall un manuscrito del tratado de Marco Vitrubio Polión. En los 10 libros que componían *De Architectura*, el arquitecto de Julio Cesar y de Augusto establecía los códigos estéticos de los órdenes clásicos, las técnicas decorativas, los tipos de edificios y enunciaba su famosa triada *utilitas, firmitas y venustas* cuya conjugación armoniosa y equilibrada garantizaba la buena práctica edilicia.

La apreciación de lo histórico y de lo artístico se incorpora paulatina y progresivamente al humanismo. Descubierta el valor de la antigüedad, se alentará su estudio e investigación durante los siglos venideros hasta llegar a conformarse los conceptos en el siglo XIX y, en consecuencia, intentar introducir su protección legal, aunque ésta ya hubiera aparecido en diversas manifestaciones confusas y aisladas.

Respecto a la distinción entre lo histórico y lo artístico, Riegl, fundador de la crítica del arte como disciplina autónoma, articula en la segunda mitad del XIX una interesante propuesta teórica en torno a dos sugerentes polos a los que denomina valor rememorativo y valor de contemporaneidad.⁷

Considera que lo artístico es siempre histórico puesto que la artísticidad del edificio se observa desde el punto de vista de la evolución en la historia del arte. Pero, dado que esta tesis llevaría a la conclusión de que todos los periodos artísticos tendrían el mismo valor o que, como mucho, el mayor o menor valor artístico se mediría por su rareza y antigüedad, el autor afirma que ciertos monumentos pueden tener un valor artístico añadido al anterior e independiente de su posición en el estadio evolutivo.

De este valor artístico complementario, cabe discutir entre su condición objetiva y absoluta o, por el contrario, subjetiva y asignada por cada generación. En este último supuesto, «*se mide el valor artístico por su proximidad a las exigencias de la moderna voluntad de arte que nunca encontrarán una clara formulación pues varían incesantemente de un sujeto a otro y de un momento a otro.*»⁸

Concluye el debate considerando que, dado que no existe un valor estético eterno, el juicio artístico de un edificio es un valor de contemporaneidad y sólo es consecuente

⁷ RIEGL, A., “El culto moderno a los monumentos”, *La balsa de la medusa* nº7, Madrid, Visor, 1987, pág.45 y ss.

⁸ RIEGL, A., *ibid.*, pág. 28.

identificar en los monumentos el valor artístico que portan siempre, pues deriva del perfeccionamiento de las técnicas con el transcurso del tiempo.

Riegl evita hablar de valor histórico de los edificios y lo sustituye por el atractivo término de valor rememorativo. En su teoría, agrupa a los diferentes portadores de significativo heredado en tres círculos progresivos que van subsumiéndose uno en otro. El círculo más restrictivo lo forman lo que llama monumentos intencionados, aquellos que fueron *«creados con el fin específico de mantener hazañas o destinos siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones venideras»*⁹; el segundo círculo, el de los monumentos históricos abarca, además de a los anteriores, a los monumentos no intencionados en los que el valor rememorativo es seleccionado contemporáneamente y por tanto, cambiante y variable según las estrategias de cada momento. Respecto a éstos, advierte que, si *«llamamos histórico a todo lo que ha existido alguna vez y ya no existe...y a esto vinculamos la idea de que lo que alguna vez ha existido no puede volver a existir y que todo lo que ha existido constituye un eslabón imprescindible e indesplazable de una cadena evolutiva»*, se llega a una expansión infinita de monumentos en esta categoría pues *«toda actividad humana o todo destino humano del que se nos haya conservado un testimonio o noticia tiene derecho a reclamar para sí, sin excepción ninguna, un valor histórico.»*¹⁰

El círculo más amplio de su propuesta es el de los monumentos antiguos que engloba, además de a todos los anteriores, a los que son simples vestigios de una existencia anterior a la del presente y que, carentes de valor rememorativo pues su estado impide reconocer intencionalidad o ausencia de ella alguna, tienen un valor de antigüedad al que describe con una importante dosis de poesía: *«el monumento es sólo un sustrato concreto inevitable para producir en quien lo contempla aquella impresión anímica que causa en el hombre moderno la idea del ciclo natural del nacimiento y la muerte, del surgimiento del individuo a partir de lo general y de su desaparición paulatina y necesariamente natural en lo general.»*¹¹ La apreciación de estos monumentos antiguos es una mera percepción sensorial sin necesidad de conocimiento intelectual previo; su valor lo aporta el deterioro derivado del paso del tiempo.

⁹ RIEGL, A., ibíd., pág. 23.

¹⁰ RIEGL, A., ibíd., pág. 24.

¹¹ RIEGL, A., ibíd., pág. 29.

Los tres círculos conducen a teorías diferentes de conservación de lo esencial significativo en el edificio.

El valor de antigüedad exige dejar que actúe el ciclo normal de degradación sin ningún quebrantamiento arbitrario del proceso y la única acción permitida es la de evitar una destrucción total prematura; en conclusión, *«no se trata de la conservación eterna de los monumentos creados en el pasado por la actividad humana sino de mostrar eternamente el ciclo de creación y destrucción, de génesis y extinción, y esto queda garantizado incluso cuando otros monumentos hayan ocupado el sitio de los hoy existentes.»*¹²

La conservación del valor rememorativo requiere la perspectiva opuesta pues considera que las deformaciones y alteraciones parciales y posteriores a su creación constituyen un factor desfavorable. Si es valor de contemporaneidad, la conservación pretende detener su deterioro hacia el futuro desde el momento presente en el que se ha concebido la apreciación histórica del monumento y aboga por su estancamiento en el estado en el que la generación calificante lo ha detectado. Los monumentos intencionados requieren una mayor rotundidad en su preservación pues el edificio ha de mantenerse eternamente fiel a su original y cualquier desviación introducida por la naturaleza o por la historia requiere inmediatamente su eliminación a través de la restauración.

Otra aportación teórica en el mismo sentido pero más avanzada es la de Choay¹³ quien, ya en el siglo XX, extiende el análisis de Riegl y distingue entre el monumento en tanto artefacto intelectual y artístico y el monumento como dispositivo fosilizado de almacenamiento de retentiva histórica que sirve al único objetivo de encarnar la memoria viva de la nación surgida en el siglo XIX ; este fin teleológico y deliberado legitima en sí la asignación de valor cognitivo, económico y artístico al edificio, justifica la necesidad de catalogación y lo hace objeto de salvaguarda, protección y conservación.

Con anterioridad a estos discursos teóricos, aplicaciones prácticas con visiones antagónicas de restauración de monumentos habían ya planteado una enfrentada

¹² RIEGL, A., *ibíd.*, pág. 54.

¹³ CHOAY, F., *Alegoría del Patrimonio*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2007.

polémica. La intervención en Nôtre Dame de Paris que realiza Viollet le Duc en 1843, partidario de una corriente continental potentemente intervencionista, arranca fuertes críticas de Morris y Ruskin, defensores acérrimos del anti intervencionismo propio de Gran Bretaña.¹⁴

Viollet le Duc adopta sin complejos una absoluta defensa desde su modernidad asignando al monumento ese valor de contemporaneidad que después elaborará Riegl y despreciando cualquier rastro de valor rememorativo. Considera Viollete le Duc que *«el término restauración y la cosa misma son modernos. Restaurar un edificio no es conservarlo, repararlo o reconstruirlo sino restablecerlo a un estado de integridad que tal vez nunca existió en ninguna época determinada.»*

Ruskin le replica que, según esa postura, la restauración consistiría en *«una destrucción acompañada de una falsa descripción de la cosa destruida.»* Muy crítico con la percepción de lo histórico por la contemporaneidad, aduce que sólo razones científicas podían aconsejar eliminar aportaciones posteriores pues asignar un valor determinado al pasado desde el presente y consagrarlo desde entonces hacia el futuro, suprimiendo estratos que épocas anteriores habían juzgado necesario añadir a un edificio, suponía desde su punto de vista una violación de confianza en la posteridad. De la misma manera, restablecer las partes que habían sido retiradas conducía a simular una ilusoria resurrección de sociedades obsoletas. En su actitud anti intervencionista proponía, enfatizando la importancia del valor rememorativo intencionado y del valor de antigüedad, normas directas de conservación: *«Vigilad un edificio antiguo con preocupada atención, protegedlo lo mejor que podáis y a toda costa de cualquier influencia que lo deteriore....reforzadlo con hierro donde se deteriore, sostenedlo con madera donde decaiga. No os preocupéis por la fealdad del auxilio.»*

William Morris, discípulo de Ruskin y más radical que su tutor llegó a afirmar que cuando un monumento había devenido inconveniente para el uso actual, correspondía levantar otro edificio en vez de modificar o agrandar el antiguo, tesis que aceptaría Viollet le Duc *«solamente cuando se trate de una ruina curiosa sin destino ni utilidad.»*

¹⁴ La disputa y citas aparecen en HOLLIS, E., *La vida secreta de los edificios*, Madrid, Ediciones Siruela, 2009, pág.237 y ss.

A propósito de la restauración del Partenón, Cesare Brandi¹⁵ hace un lírico canto a su valor de antigüedad en el mismo sentido de Ruskin y Morris y niega cualquier valor de contemporaneidad: *«Un monumento nos lo entrega la historia y cualquier intervención que cambie su aspecto debe estar justificada por razones superiores de estética o de conservación.»* El edificio, destruido en sus fachadas laterales tras la explosión del polvorín que almacenaba en su interior en 1687, fue reconstruido en 1921 por razones injustificadas a juicio de Brandi: *«La nostalgia por no ver el monumento, menoscabado a lo largo de la historia, en su aspecto originario, se convierte en impulso irrazonable de devolverlo, cueste lo que cueste, a su aspecto originario. Irracional porque implica anulación de la historia, reversibilidad del tiempo irreversible.»*

Las elaboraciones doctrinales sobre lo histórico y lo artístico en los edificios pierden interés teórico al toparse en el siglo XX con una superación de su alcance provocada por la explosión del término cultura que analizaremos en el siguiente epígrafe.

Todavía la Carta de Atenas, redactada en 1931 durante la Primera Conferencia Internacional sobre restauración del patrimonio, refiere a lo histórico y a lo artístico. El documento, en cuya elaboración participaron numerosos países, entre ellos España representada por el arquitecto madrileño Leopoldo Torres Balbás, fijó en breves líneas los criterios de la moderna rehabilitación científica de monumentos y descartó las reposiciones integrales herederas de las teorías intervencionistas, antes comentadas, de Viollet-Le-Duc.

Así, en el punto 2 la Carta observa que, a pesar de la diversidad de casos especiales en los que se pueden adoptar soluciones específicas, predomina *«la tendencia general a abandonar las restituciones integrales y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento regular y permanente, aptos para asegurar la conservación de los edificios»* y recomienda *«respetar la obra histórica y artística del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época.»* De alguna manera, niega la posibilidad de cualquier valor de contemporaneidad, sea de designio rememorativo o artístico, al considerar que ninguna generación puede arrogarse la capacidad de apreciar o despreciar las aportaciones anteriores.

¹⁵ BRANDI, C., *Viaje a la Grecia antigua*, Barcelona, Editorial Elba, 2010, pág.131 y ss.

Sin embargo, la posterior Carta de Venecia, adoptada por el ICOMOS en 1965 y redactada con ocasión del II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de monumentos históricos, inicia su mensaje de una moderna manera que supera a lo histórico y a lo artístico y que engarza con ese concepto amplísimo de cultura, propio del siglo XX y que comentaremos a continuación. Categóricamente afirma: *«Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente testimonio vivo de sus tradiciones seculares.»* El examen de valor lo descansa en soportes de juicio aún más ambiguos que el arte y la historia pues si ya es difícil un consenso general en la determinación de estos últimos, identificar con rango universal lo que queda en la piedra y en la madera de *mensaje espiritual del pasado*, de *testimonio vivo* y de *tradiciones seculares* se antoja un imposible.

Y con la misma intención globalizadora extiende el concepto de monumento, sin definirlo en el articulado, a entornos rememorativos, intencionados o no, en el artículo 1: *«la noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural»* y en el artículo 3: *«la conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio histórico.»*

De hecho y para concluir, en la Carta del ICOMOS de 2003, ratificada en su 14ª Asamblea General en Zimbabwe, con principios muy exhaustivos para la conservación y la restauración, desaparece el término monumento que se sustituye por el de estructuras del patrimonio arquitectónico y las referencias del texto citan lo cultural, en cuyo estudio pasamos a concentrarnos, sin mención alguna ni a lo histórico ni a lo artístico.

b) Reflexiones en torno a lo cultural

Si algo caracteriza al término cultural es su continua transformación y sus múltiples posibilidades de absorción de conceptos de la sociología, la política y la antropología; la misma economía lo incluye hoy en su campo de estudio al vincularlo estrechamente al progreso y al desarrollo sostenible de las naciones.

Y esa versatilidad extraordinaria hace que la voz cultura juegue en la frase morfológica todas las funciones sintácticas. Se utiliza en el lenguaje culto y en el popular, con significados precisos o amplios derivados del sentido común; permite diferentes expectativas y múltiples perspectivas así como referencias al complejo universo jurídico, político, económico, artístico, histórico y social. Ni su extensión espacial ni temporal es un asunto unánime en los autores.

A su vez y en el ámbito jurídico, los llamados derechos culturales son derechos nacidos de instituciones diversas en ámbito territorial, en capacidad coercitiva y en intencionalidad normativa, emitidos sobre la cultura en su amplísima acepción. Recogen desde derechos *a* la cultura a derechos *de* la cultura, conceptos que a su vez encierran derechos *con* y *en* la cultura. En el derecho *de* la cultura se esconde una referencia al futuro tras una ambigua personificación del sujeto que coloca a lo cultural en posición de titular del derecho a perpetuarse y conservarse para las generaciones venideras y de acreedor de obligaciones impuestas a la generación presente. El derecho *a* la cultura indica, sin embargo, a ésta como complemento directo que recibe la acción activa de los verbos conocer y disfrutar de ella por la generación actual.

Desde que la utilizara Cicerón en sentido figurado como atributo de la filosofía, «*la filosofía es cultura de la razón*»¹⁶, se han dado muchas definiciones del concepto cultura como sustantivo; unas meramente enumerativas y descriptivas de su contenido, otras más concisas señalando los aspectos simbólicos, sociales, históricos, materiales, organizativos y muchos otros a los que se puede aplicar el término. La simple recopilación de todas ellas superaría la extensión del presente estudio que quedaría, además, inconcluso dado que, sin poder hacer todavía un balance, las actuales tecnologías informáticas están marcando de forma importante tanto el acceso y la difusión de la cultura en sí misma como la creación y el consumo de productos culturales o las metodologías científicas para su preservación.

Más que las definiciones, es interesante citar las sucesivas inundaciones de distintas sensibilidades que han ido calando en lo cultural y marginando gradualmente a lo histórico y a lo artístico de su contenido.

¹⁶ La palabra cultura aparece por primera vez como término teórico en la obra de Cicerón del año 45 a.d.C. *Disputas tusculanas*.

Velasco ¹⁷ analiza estos *desplazamientos metafóricos y metonímicos* del concepto impulsados por fenómenos políticos y sociales a lo largo de la historia. Cultura ha pasado de referirse al *cultivo de las plantas* y, en general de la agricultura, a significar el *cultivo del espíritu*; del *proceso* al *resultado*, de las *capacidades del sujeto* a las *obras y los objetos*, de lo *individual* a lo *colectivo*, de lo *distinguido y refinado* a lo *común y popular* y, en el momento actual, la cultura ha ampliado su extensión desde los *logros de la civilización occidental* cuando se la menciona en singular a los *modos de vida de todas y de cada una de las sociedades humanas* si se la usa en plural.

Los descubrimientos científicos de la antropología han tenido una influencia trascendental en esta expansión del significado.

Ya en 1774, Johann Gottfried Herder, filósofo alemán, precursor del romanticismo y del relativismo cultural, proclamaba que el genio de cada pueblo se mostraba en la diversidad cultural; el orgullo nacional radicaba en la cultura que le guiaba al destino específico para el que estaba designado.

La definición de cultura del antropólogo inglés Edward B.Taylor, aparecida en 1871 en su ensayo *Primitive Culture*, ampliaba el concepto al conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, «*y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre.*»

En el siglo XX, la cultura era ya un asunto central de la antropología y abarcaba todos los fenómenos humanos que no fueran el total resultado de la genética; desde la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa hasta las distintas maneras, hábitos y usos de vida de las comunidades en las diferentes partes del mundo.

Culturalistas, evolucionistas, funcionalistas debatían sobre el valor de la cultura mientras las jóvenes naciones emergentes tras la descolonización comenzaban a redactar sus primeras constituciones nacionales en busca de una identidad propia que, apoyada justamente en lo diferencial de la cultura, encajara en el concierto universal.

El antropólogo francés Claude Levi-Strauss, fundador de la antropología estructural y uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX, había publicado en 1962 su obra

¹⁷ VELASCO MAILLO, H., op.cit., pág. 18.

El pensamiento salvaje. Sus ideas sobre la evolución del hombre habían recorrido todo el mundo. Propugnaba que el hombre no se realizaba dentro de una humanidad abstracta sino en las culturas tradicionales que se explicaban a sí mismas en función de una situación estrictamente definida en el tiempo y en el espacio. La variedad de las culturas mostraba pues momentos progresivos en un proceso hacia la unidad y la identidad de la humanidad y disimulaba una realidad más profunda que tardaría en manifestarse.

En su opinión, la ausencia de mención a la diversidad en las grandes declaraciones universales de derechos del hombre las invalidaba porque cada uno tenía derecho a su cultura en tanto signo de su propia identidad particular.¹⁸ El progreso de los pueblos no habría ocurrido sin la cooperación entre sociedades diversas a lo largo de la historia y a su entender, el desprecio de la civilización occidental hacia las múltiples aportaciones de otras culturas y civilizaciones como las orientales, las amerindias o las comunidades supervivientes en los polos se debía al empeño impuesto por la fuerza de la primera en demostrar su preeminencia sobre la base falsa de que sus avances técnicos, políticos, económicos y sociales habían *liberado* a la humanidad de la barbarie.¹⁹

Sus publicaciones *Raza e historia* en 1952 y *Raza y cultura* en 1983 trataron de proporcionar argumentos a las Naciones Unidas para la defensa de la diversidad cultural amenazada por los movimientos racistas en un primer momento a los que se añadirían después el concepto estrictamente mercantil de desarrollo y la globalización.

En definitiva, sus conclusiones llevaron a la comunidad internacional a asumir dos ideas vertebrales: la idea de que la diversidad cultural no podía atribuirse a una diversidad biológica o genética y, por tanto, cualquier individuo podía ser socializado en cualquier cultura y la idea de que la evolución cultural y la biológica estaban imbricadas simultáneamente en el desarrollo del individuo pues éste nacía en culturas ya instaladas que empezaban a actuar sobre él, antes de madurar, en contextos concretos de aprendizaje cultural.

¹⁸ A pesar de las críticas de Levi-Strauss, la UNESCO había adoptado en múltiples documentos, casi desde sus orígenes, el concepto de diversidad cultural como antídoto legal e intelectual contra el racismo.

¹⁹ Un ejemplo que manifiesta esta actitud lo encontramos en Maxime du Camp quien en su obra “Revue des deux mondes. Cap. VIII: La Grèce” opina: «Si Grecia y el Cristianismo no hubieran existido, el mundo continuaría aún salvaje, en la edad de piedra de la inteligencia.» *Souvenirs littéraires. Revue de Paris*, Paris, 1882, pág.302.

Hoy tiene valor cultural cualquier síntoma de lo identitario, de lo diverso²⁰, de lo sostenible, de lo dialogante, de lo solidario y es cultura protegible todo aquello material y espiritual, intelectual y emocional, artístico y social que ha hecho, hace o hará diversos entre sí a las sociedades, a los grupos o a los pueblos, ignorando, como cita Velasco, «cualquier esquema o línea evolutiva que establezca estadios y sitúe en ellos a las distintas culturas.»²¹

En el mismo sentido crítico, Rodríguez Lafuente²² manifiesta con cierto sarcasmo que «si todo es cultura, ha llegado la hora de redefinir y perfilar los contornos de la cultura» pues la irrupción de millones de personas en el otrora distinguido club de la cultura ha propiciado una innegable perturbación del debate que discurre entre posturas extremas. Y aporta en su reflexión las meditaciones contrapuestas de Umberto Eco, quien considera que lo que llamamos cultura no es más que «un largo proceso de selección y filtro», y la de los hilos invisibles de Orlando Figes. Para este ensayista, la cultura son «los códigos no escritos, señales y símbolos, rituales y gestos y actitudes comunes que fijan el sentido público de aquellas obras-obras de arte o discursos literarios- y organizan la vida interior de una sociedad» y, en consecuencia, extienden

²⁰ Entre otros documentos internacionales, los más relevantes sobre la diversidad cultural son:

- *Declaración sobre la raza*, París 1950.
- *Declaración sobre naturaleza de la raza y de las diferencias sociales*, París 1951.
- *Propuesta sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial*, Moscú 1964.
- *Declaración sobre raza y prejuicios sociales*, París 1967 y 1978.
- *Convención sobre protección del patrimonio mundial y cultural*, París 1972.
- *Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales* de Méjico en 1982.
- *Reconocimiento sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y el folklore*, París 1989.
- *Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, Nuestra Diversidad Creativa*, París 1996.
- *Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo*, Estocolmo 1998.
- *Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural*, París 2001.
- *Convención para la protección de la diversidad de las expresiones culturales*, París 2005.

²¹ VELASCO MAILLO, H., op. cit., pág.26.

²² RODRÍGUEZ LAFUENTE, F., “Las máscaras de la cultura”, *Revista de Occidente*, nº 378, noviembre 2012, pág.10 y ss.

la cultura a las actitudes ante la muerte, las formas de matrimonio, las gastronomía, las reacciones ante el paisaje, los usos sociales y cualesquiera manifestaciones de la conciencia relacionadas con la política y la ideología, con las costumbres, el folklore y la religión.

Alessandro Baricco²³ llama a lo cultural nacido de esta mutación el *arte del surfing* en tanto saqueo o vaciado de sentido de lo que tradicionalmente se consideró sagrado, con un rechazo consciente de la profundidad y sin organización jerárquica alguna del saber ni barreras que impidan su masiva expansión. En definitiva, un continuo y rápido movimiento en la superficie similar al *surfing*.

En todo este confuso panorama actual creemos necesario citar dos tentativas importantes de discernimiento: por un lado, la que introduce en la polémica la sofisticada doctrina italiana al distinguir entre lo extenso cultural y lo cultural protegible y por otro, el intento de la UNESCO, a nuestro juicio fallido como explicaremos, de incorporar una cierta sistemática dentro de una absoluta comprensión global de lo cultural.

Ante la inminente amenaza de desarrollo urbano irregular en Italia, se abrió una encuesta pública tras la que se promulgó la ley de 26 de abril de 1964 que instituía la conocida como Comisión Franceschini²⁴ y que centraría su trabajo en la *Indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*.

Su objetivo era establecer una teoría general para unificar en una ley única las tres leyes de protección y tutela del patrimonio vigentes en Italia, la ley nº 1089 de 1939 de *tutela*

²³ BARICCO, A., *Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación*, Barcelona, Editorial Anagrama S.A., 2008, pág.114.

²⁴ La Comisión Franceschini tomó el nombre del ministro que la presidía oficialmente. El grupo estaba compuesto por 16 miembros del Parlamento y 11 expertos en arte, historia, arqueología, derecho y biblioteconomía. La Comisión se encargó de revisar la legislación existente y el marco administrativo y buscar mecanismos de protección del patrimonio cultural. Se produjeron 84 declaraciones sintetizadas en 9 recomendaciones de acción urgente: establecer un servicio de seguridad de protección del patrimonio, detener proyectos urbanos en áreas de interés monumental, arqueológico o ambiental, iniciar un inventario sistemático del patrimonio italiano, convertir en espacios de libre acceso los edificios históricos utilizados por el Estado para sus fines administrativos, eliminar intervenciones y tratamientos inaceptables en bienes del patrimonio, establecer un organismo para la investigación, conservación, restauración y documentación, formar personal técnica y científicamente responsable del patrimonio, promover las producciones artísticas contemporáneas y realizar campañas de concienciación del respeto al patrimonio.

delle cose d'interesse artistico o storico, la ley nº 1947 de 1939 sulla protezione delle bellezze naturalli y la ley nº 1409 de 1963 de patrimonio archivístico.

En su primera Declaración, la Comisión había introducido el concepto de bien incluido en el patrimonio cultural de la nación: *«Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.»*²⁵

De ella queremos destacar el remarcable diálogo que intercaló entre el interés y el valor. El interés lo determinaban disciplinas regladas- la arqueología, la historia, el arte, las ciencias ambientales y paisajísticas, las documentales o la literatura- y, por tanto, sería siempre un concepto científico. El valor, sin embargo, quedaba a decisión de un genérico y anónimo colectivo que decidiría en cada momento su trascendencia y cuyos criterios, a pesar del actual enfoque universalista de la cultura, podrían cambiar a lo largo del tiempo. No era un valor económico ni un valor de antigüedad sino un valor de pretensiones bivalentes entre un valor de progreso y de desarrollo en la mejora de las condiciones de vida físicas y espirituales del hombre en el medio y un valor de utilidad que permitía reconocer y reconstruir su pasado a la generación actual y a las futuras.

Ese valor cultural protegido tenía que estar encarnado en un testimonio material. La *testimonianza*, término introducido en el italiano en el siglo XIII como declaración, prueba o signo de algo, era entendida en la definición de la Comisión en tanto exposición de la creatividad humana; la materialidad exigida sería o en la cosa en sí o en un mero soporte que permitiera su circulación para los supuestos de obras del pensamiento filosófico y científico, obras literarias, escenográficas y musicales.

Años más tarde, en 1976, Massimo Severo Giannini, quien había sido coordinador cualificado del grupo VIII de la citada Comisión, publicó su estudio *“I beni culturali”*²⁶ tras el cual el concepto de bien cultural se introdujo en la doctrina

²⁵ Atti della Commissione Franceschini, Dichiarazioni I, Parte Prima, Totoi I, “Per la salvezza dei beni culturali in Italia”, *Patrimonio culturale della Nazione*, Roma, 1967.

²⁶ GIANNINI, M.S., “I beni culturali”, *Revista de Patrimonio cultural y Derecho*, nº9, 2005, pág.13.

y en las legislaciones de todo ámbito territorial.²⁷ El autor consideraba que la definición de la Comisión aportaba un sentido amplio de lo cultural cuando hacía referencia a la historia de la civilización, connotación que era suficiente para identificar los bienes culturales pero no para someterlos a la protección de la ley a la que, sin embargo, quedaban sujetos ciertos bienes en los que lo cultural, en sentido restringido y con efectos jurídicos, se equiparaba al interés arqueológico, histórico, artístico, ambiental, paisajístico, documental y literario y al interés de testimonio material con valor de civilización.

Por otro lado, la UNESCO elaboró en 2005 un catálogo de diez criterios, seis para bienes culturales y cuatro para bienes naturales, que permitirían identificar un *valor universal excepcional* en el orbe cultural y, en consecuencia, incluir el bien en la lista del Patrimonio de la Humanidad.

De estos criterios, que se refieren a todas las alegorías y metonimias de lo cultural que hemos indicado, serían aplicables a los edificios los siguientes:

I. *Representar una obra maestra del genio creativo humano.* Es el único criterio que identifica el valor cultural con un valor artístico, aunque éste, despojado de referencia temporal alguna, parece aproximarse más a lo original, lo inaugural o lo peculiar que a la virtud práctica intelectual.

II. *Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.* El valor cultural es en este caso un valor probatorio del avance de la técnica por el canje de ideas, materiales o espirituales, entre culturas.

III. *Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida.* El criterio insiste en el valor cultural de lo diverso por el mero hecho de serlo; la rareza y la singularidad vuelven a ser los parámetros de medida.

IV. *Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana.* Es un

²⁷ El término *bienes culturales* aparece, entre otros textos legales, en la Convención de La Haya para la Protección de los bienes culturales en caso de un conflicto armado de 14 de mayo de 1954, en el Reglamento nº 116/2009 del Consejo de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2008 relativo a la exportación de bienes culturales y en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico artístico español.

valor cultural claramente rememorativo y aunque parece aproximarse más al concepto de obra intencionada que hemos analizado en Riegl, la significancia exigida va a imputarla la contemporaneidad.

V. *Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.* Aparece aquí, a nuestro juicio, un valor de antigüedad que simplemente constata el diálogo del hombre con su entorno natural.

VI. *Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal.* El manifiesto relativismo instalado en este criterio donde el valor cultural es un valor de proximidad o de relación con otros valores culturales ha hecho al Comité de catalogación descartarlo si no confluye alguno más de los criterios anteriores.

De los seis postulados enunciados, cuatro se asocian con dones testimoniales- el bien da fe hacia el futuro de la historia pasada contenida en él- y sólo dos rescatan el valor de lo artístico o de lo estético.

Sin embargo, esta loable intención homogeneizadora de lo cultural por parte de la UNESCO falla radicalmente en el proceso de determinación pues éste se monta sobre un requisito previo que transforma en absolutamente heterogéneo el resultado ya que la consideración del expediente se inicia a petición del país interesado quien ha debido previamente valorar su obra con total libertad de juicio y sin sujeción a criterio alguno unificador.

Además, los posibles dones culturales de la elección no son contrastables ni comparables debido a que cualquier análisis cuantitativo o cualitativo de su condición tiene que ajustarse al axioma ineludible de la igual dignidad de todas las culturas. En el seno del territorio europeo, que ha compartido historia y arte, es más fácil identificar edificios portadores de méritos similares los cuales pueden no existir o divergir radicalmente de los que se estiman en otras áreas del planeta. Y así el único universo común entre los Sitios australianos de presidios incluidos en la lista de la UNESCO en 2010 porque «*constituyen los mejores ejemplos subsistentes del fenómeno de la deportación masiva de delincuentes y de la expansión de las potencias coloniales europeas mediante la explotación de mano de obra reclusa*» y la Catedral de Burgos

incluida en 1984 pues *«su espléndida arquitectura y la colección excepcional de obras maestras que alberga –pinturas, sitiales del coro, retablos, tumbas y vidrieras– son un verdadero compendio de la historia del arte gótico»*, es su coincidente función de archivo documental.

En conclusión, la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO adolece de consonancia y de cohesión interna y se aproxima a un anecdotario de elementos elegidos desde una óptica apreciativa fuertemente nacionalista.

Resumiendo todos estos aspectos, creemos que, en su interpretación actual, caracterizan al valor cultural las siguientes notas:

- subjetividad pues tanto las emociones estéticas y sensoriales como el arraigo o la apreciación de las tradiciones y los valores pertenecen a la esfera de interés de cada sujeto y de cada grupo sin que exista parámetro alguno que determine el número de individuos necesario o las condiciones singulares para considerarlos relevantes. Lo cultural no es ya ni siquiera un valor de contemporaneidad del que hablábamos para lo histórico y lo artístico sino un valor de subjetividad.
- dinamismo que hace imposible cerrar el concepto en un presente determinado puesto que, aceptado por todos que la cultura debe preservarse para trasmitirla a las generaciones futuras, cualquier definición debe permitir que sean éstas las que, en su momento y con sus criterios, vuelvan a delimitar los confines del término.
- flexibilidad dado que los enunciados deben recoger tradiciones jurídicas y devenires históricos, sociales y políticos muy diferentes e, incluso a veces, antagónicos.
- convergencia hacia la elaboración doctrinal de los derechos fundamentales del hombre. En este sentido, el llamado Grupo de Friburgo, equipo de investigadores de la Universidad de Friburgo bajo el amparo de la UNESCO, y en especial Meyer-Bisch, lleva ya más de una década trabajando en la definición de los derechos culturales de cara a su inclusión, con todo el rigor técnico posible, en los instrumentos jurídicos internacionales de protección. En su análisis, son tres los derechos fundamentales afectados por un contenido cultural:

- derecho a la no discriminación por razones culturales
- derecho al respeto de la identidad cultural

-libertad de práctica y respeto de tradiciones, usos y ritos

En el mismo sentido, la sociólogo pakistaní Farida Shaheed, nombrada Relatora Especial de la ONU, ha presentado hasta la fecha 15 informes sobre el contenido cultural derivado del desarrollo de los artículos 22, 26 y 27 de la *Declaración universal de derechos humanos* de 1948 y del artículo 15 del *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* de 1966.

En nuestra opinión, esta inflamación de lo cultural y su deriva hacia lo identitario y lo diverso ha vuelto a situar el problema en el punto de partida.

Si bien la proclamada omnipresencia de lo cultural ha cumplido su expiatoria función de perdonar la acusación que inculpaba a occidente de haber caracterizado lo protegible con la letra única de su historia y de su arte, es cierto que, una vez tranquilizadas las conciencias con la ampliación actual del espectro, queda sin resolver el objetivo primero de la apreciación del valor cultural que consiste en calificar un edificio para conservarlo e impedir que el hombre o la naturaleza lo destruyan y se lleven con ello un testimonio de la evolución de la especie.

Porque, como clarísimamente auguraba la doctrina italiana comentada al distinguir entre valor e interés, el asunto no es determinar qué o quién tiene valor cultural sino a qué y a quién se dedican los escasos recursos disponibles para la conservación, la protección y la salvaguarda.

Como no existe un solo rincón en el planeta desprovisto de valor testimonial ni un solo individuo carente de tradiciones vinculadas a un territorio y, en consecuencia, todo el planeta y todos sus rincones pueden exigir hoy la protección de sus valores culturales, habrá que seleccionar dentro de ello la masa protegible que constituirá el concepto restringido de patrimonio que analizaremos a continuación.

Y, sin duda, a fin de contemplar todas las sensibilidades, el criterio electivo se verá orientado hacia la conservación de la peculiaridad, la excepcionalidad, del ejemplar único de cada contexto social, histórico y territorial con la difícil conclusión de que quizá haya que descatalogar catedrales góticas, por su carácter reiterativo de ejemplares ya incluidos en el listado, y poder con ello catalogar vestigios singulares. Pero con ese descarte de edificios repetidos se producirá una nueva paradoja en el concepto testimonial que impregna hoy a lo cultural pues desaparecerá de la faz de la tierra la

prueba, manifestada en la abundancia actual de ejemplares similares protegidos del mundo occidental, con la que la universalidad igualitaria ha denunciado la hegemonía, construida sobre sí misma y quizá de forma ignominiosa para otros pueblos, de una cultura sobre las otras que hemos ya mencionado.

Creemos, por ello, que en auxilio de este desbordado concepto de lo cultural y con el claro cometido de matizar los contornos de lo protegible, han surgido en la comunidad internacional otros valores como el valor de sostenibilidad o el de desarrollo regional, a los que nos referiremos más adelante y que, al menos en el caso de los edificios catalogados, van a jugar un papel significativo.

Opinamos también que, así como en otras manifestaciones culturales el debate es muy confuso, en el caso concreto de la arquitectura, el arte y la historia grabados en la piedra y en la madera de un edificio no se pueden ignorar ni subestimar por debajo de otros conceptos.

c) la noción de patrimonio

Planteamos de nuevo un conflicto terminológico que, según nuestro criterio, vuelve a intoxicar la asepsia de cualquier reflexión.

A nuestro juicio, el término patrimonio no parece el más indicado para identificar una masa de entidades con características culturales apreciadas por una sociedad global e indeterminada porque en las lenguas latinas al vocablo patrimonio le acompaña siempre un intuitivo rumor a propiedad, a titular demanial definido con facultades dominicales de disposición, uso y disfrute del bien; circunstancias que no se sienten en expresiones menos herederas de la construcción jurídica romana como el *heritage* anglosajón.²⁸

La legislación comparada en castellano y portugués aporta otros términos sustitutivos al de patrimonio cuando menciona al conjunto de bienes culturales de la nación. Panamá, en su Constitución Nacional de 1972, habla de *Cultura Nacional*, ambas con mayúsculas; la misma voz, pero con minúsculas, la utiliza la Constitución de la Republica Federativa del Brasil de 1988 y la República de Paraguay, en su Constitución Nacional de 1992, lo denomina *memoria colectiva*.

²⁸ Irini A. Stamatoudi, en su obra *Cultural property law and restitution. A commentary to international Conventions and European Union law*, UK Northampton, MA, USA, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2011, analiza las múltiples implicaciones jurídicas latentes en el término *cultural property* y que no aparecen, sin embargo, en el de *heritage*.

Pensamos que la utilización de otras locuciones españolas menos connotadas del aspecto dominical para referirse al patrimonio histórico-artístico cuando la mención está al margen del lenguaje legal, facilitaría el diálogo entre todos los implicados.

Entre otras, la rica lengua española aporta los términos de legado cultural aunque éste tiene un componente oclusivo de pasado que no admite creaciones artísticas contemporáneas, o tesoro cultural²⁹ con un matiz de calculable o incalculable valor económico, o acervo cultural, término con tradición pero sin traducción precisa en español que recoja todo su alcance y que, además de sonar a muy antiguo, está contagiado de un problema ortográfico pues *acerbo* significa áspero y desagradable y de otro problema fonético ya que el *acqui* francés del derecho comunitario exigible para el ingreso en la Unión Europea se transcribió al castellano por *acervo* comunitario quedando intrínsecamente asociado a la noción de corpus jurídico. No obstante, la voz acervo cultural aparece en los Acuerdos Iglesia-Estado.

La expresión más moderna de bagaje cultural³⁰ que proponemos en lugar del término patrimonio tiene un componente lírico interesante: equipaje, embalaje de bienes culturales, dotación que reciben los pueblos de sus predecesores y con el que deben viajar, aumentando el contenido con sus propias aportaciones, para entregarlo, al final de su recorrido por la historia, a los siguientes.

Lanzamos la propuesta filológica aunque en el ámbito de este estudio que pretende abarcar tanto aspectos jurídicos como humanísticos de la cultura, seguiremos utilizando por simplicidad conceptual el término común al uso de patrimonio.

La necesidad identitaria de un patrimonio nacional que nace con la Revolución francesa ha evolucionado hasta la actualidad bajo la misma sintomatología que hemos expuesto para el valor cultural.

²⁹ La Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967 utiliza este término de *tesoro cultural* de la nación. También lo utiliza la República de El Salvador en su Constitución de 1983.

³⁰ Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, bagaje, que procede del francés *bagage* - carga-, de *bague*, y éste del gótico *bagga*-paquete-, tiene tres significados:

1. Equipaje, conjunto de cosas que se llevan al viajar.
2. Cargamento militar de un ejército, y por extensión, todo lo que acompaña a los ejércitos cuando se desplazaban con familias, incluso los servicios necesarios como zapateros o taberneros.
3. De forma metafórica conjunto de conocimientos de una persona, colección.

El sociólogo Prats³¹ ha elaborado la interesante tesis del patrimonio cultural como construcción social creada por la sociedad de masas que nace con desllo del capitalismo y tras la revolución industrial. Son dos las operaciones, complementarias y sucesivas, en las que se cimenta su armazón. La primera es la que denomina sacralización de la externalidad cultural y en ella se genera un sistema simbólico de representación en contra de la creciente separación de la naturaleza y del pasado y a favor de la valoración del individualismo y la singularidad del ingenio. El triángulo *«naturaleza virgen o indómita por oposición al espacio domesticado por la cultura, el pasado como tiempo fuera del tiempo por oposición no al tiempo presente sino al tiempo percibido como presente y la genialidad»* fundamenta la experiencia cultural e instituye el patrimonio en torno a estos tres vértices: lo natural, la historia y la creatividad. La segunda operación de esta construcción social es la activación o puesta en valor del patrimonio, movimiento liderado por los poderes públicos pero definido conjuntamente con otros poderes fácticos y con la propia sociedad. El autor resume su teoría en los siguientes términos: *«la legitimación de unos referentes simbólicos a partir de unas fuentes de autoridad, de sacralidad si se prefiere, extra culturales, esenciales y, por tanto inmutables. Al confluir estas fuentes de sacralidad en elementos culturales materiales o inmateriales asociados con una identidad dada y unas determinadas ideas y valores asociados a los elementos culturales que la representan, así como el discurso que la yuxtaposición de un conjunto de esta naturaleza genera o refuerza, adquieren asimismo un carácter sacralizado y, aparentemente, esencial e inmutable.»*³²

La doctrina italiana vuelve a ser novedosa en la definición de este liderazgo estatal del patrimonio cultural y con sus tesis supera las trasnochadas posturas que hablaban de bienes funcionalizados o afectados al uso público o colectivos administrados por el Estado.

Para Giannini³³ el *«bien cultural tiene como soporte una cosa, pero no se identifica con la propia cosa, antes al contrario, como bien, se adjetiva por el valor cultural inherente a dicha cosa.»* Esta distinción le permite diferenciar entre el continente físico, el bien

³¹ PRATS, L., “Concepto y gestión del patrimonio local”, *Cuadernos de Antropología*, nº 21, 2005, prólogo.

³² PRATS, L., *Antropología y Patrimonio*, Barcelona, Editorial Ariel, 1997, pág.22.

³³ GIANNINI, M.S., op. cit., pág. 30.

patrimonial, el elemento material, la cosa, que puede ser objeto de derechos dominicales particulares y el bien cultural, el elemento inmaterial, objeto de potestades activas del poder público.

Concluye que entre bien cultural y bien patrimonial no existe una correspondencia unívoca ni implicaciones jurídicamente definidas. El bien cultural es siempre público porque lo es su fruición, con independencia de la titularidad pública o privada de pertenencia de la cosa a la que está asociado. No es el Estado quien tiene el goce de la cosa sino que el titular de esa facultad dominical de disfrute es un grupo desagregado e indeterminado de personas físicas, inidentificables en el presente y ciertas en el futuro.³⁴

Vaquer Caballería³⁵ considera que la unión inescindible entre cosa y bien cultural ha quedado ya superada; son múltiples los ejemplos en los que el contorno entre bien material y bien cultural no coinciden. En unos casos se trata de bienes complejos que no se identifican con una cosa apropiable sino con varias entre las que puede existir una discontinuidad física; en otros porque son bienes que no están vinculados ineludiblemente a una cosa y pueden ser registrados en variados tipos de soportes, en particular desde la introducción de las nuevas tecnologías.³⁶ Además, la tendencia a reconocer lo cultural en la riqueza etnográfica hace que se consideren bienes culturales a actividades varias, usos, costumbres, ritos, comportamientos de las comunidades que no están arraigados ni a un objeto material ni a un soporte de difusión aunque su conservación exija documentarlo y registrarlo en algún medio, medio que puede ser real o virtual.

Queremos concluir con una breve mención al singular y dinámico concepto de patrimonio de las civilizaciones orientales pues la trascendencia que le otorgan se basa en su función simbólica y moral de ligazón y atadura con los antepasados. El valor

³⁴ GIANNINI, M.S., op. cit., pág. 35.

³⁵ VAQUER CABALLERÍA, M., “La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial”, *Revista Museos.es*, nº 1, 2005, pág.94.

³⁶ Un ejemplo sorprendente de las posibilidades de las metodologías actuales, cuyo impacto en todo el ámbito de la cultura exige un meticuloso análisis, es la reproducción exacta que han permitido de las pinturas de Altamira en un inmueble contemporáneo y actual, colindante al legendario; complejíssimos procesos técnicos en su proceso de copia han, de alguna manera, aislado y extraído el valor cultural, liberándolo de la roca a la que, hasta entonces durante milenios, parecía estar eternamente condenado.

superior del patrimonio radica en el hecho mismo de la transmisión y del traspaso y no del tesoro o riqueza que supongan los objetos en sí que se endosan a la generación siguiente como, de alguna manera, considera la civilización occidental.

I.1.ii. El valor de culto

El valor de culto asignado a un inmueble ha sido muy diferente entre las distintas religiones.

Los magníficos templos griegos se construían con el fin de alojar esplendidas estatuas del dios en la cella a modo de relicarios, cuyo cuidado y mantenimiento asumían las sacerdotisas alojadas en el opistódomo. En el mismo sentido, Riegl menciona que la civilización romana asignaba un valor de contemporaneidad y no rememorativo a sus edificios religiosos pues *«el respeto no se debía a la obra humana, sino a la divinidad que había tomado su morada, transitoria, en la forma perecedera.»*³⁷

Pero, además, de variar entre las religiones, el valor de culto de un inmueble se fue transformando a medida que las creencias permanecían y tenían que satisfacer a sociedades históricamente diferentes.

Aroca señala que, hasta la construcción romana del Panteon, los templos sagrados no eran lugares que albergaran fieles ni su diseño respondía a ritos específicos; los sacrificios se celebraban en el exterior del templo en la fachada del sol naciente y, excepto en contadísimas situaciones, nadie accedía a la morada del dios.³⁸

En los fundamentos antecedentes del catolicismo se encuentra el germen de un culto al valor rememorativo de los edificios; la Biblia³⁹ cuenta el éxodo de Moisés que vagó por el desierto con el tabernáculo portátil en unas parihuelas de madera de acacia hasta que, establecidos en un territorio, el rey Salomón acometió la edificación de un templo a imagen y semejanza del pequeño tabernáculo. Este valor rememorativo se perpetuó, a juicio de Riegl, en la incesante actividad de la Iglesia a lo largo de los siglos y la llevó a

³⁷ RIEGL, A., op. cit., pág.41.

³⁸ AROCA HERNÁNDEZ-ROS, R., *Edificios mágicos*, Madrid, Espasa Libros, 2014, pág.141.

³⁹ Las descripciones y medidas del tabernáculo y del templo son extremadamente precisas en el relato bíblico.

que «todas y cada una de las obras de arte religiosas puedan considerarse monumentos suyos.»⁴⁰

El valor de culto del patrimonio de la Iglesia queda estipulado en el canon 1254 del vigente Código Canónico de 1983 cuando establece los fines propios principales que la misma persigue y que son: «sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados.»

Cualquier institución de la Iglesia debe tener como finalidad el bien común de la misma y tender al objetivo de la salvación de las almas por lo que, como cita Reyes Vizcaino «no podría darse una asociación en la Iglesia con otra finalidad, aunque sea lícita, como lo son las sociedades anónimas, que tienen la finalidad -legítima en sí misma- del lucro de los socios. De modo que una asociación, cualquier asociación de la Iglesia, cumple con la *salus animarum*.»⁴¹

El fin de culto constituye la razón elemental que ha servido a la Iglesia para atesorar su importante patrimonio mueble e inmueble. Éste, además de servir como objeto dominical necesario a uno de sus fines pues para *sostener el culto* divino la Iglesia tiene que disponer de templos que acojan la liturgia y la acción pastoral dotados de pertenencias y accesorios de devoción, debe producir beneficios suficientes que permitan conseguir los otros fines de *sustentar al clero, permitir obras de apostolado y atender las necesidades de los desfavorecidos*.

Rodríguez Domingo considera que a estas funciones básicas de los bienes del patrimonio eclesial, vigentes en buena parte de muchos de ellos, «el transcurso de los siglos, los materiales aplicados o su grado de artísticidad les han procurado una nueva competencia como es la función cultural. El significado cultural de estos bienes es asumido por la Iglesia como un valor añadido sobre el estrictamente religioso que en origen tuvieron. En efecto, la función constituye un criterio de primera importancia dado que la validez como testimonio histórico de estos bienes se cumple a través del mantenimiento de sus cometidos originales derivados de su tipología. De hecho, el

⁴⁰ RIEGL, A., op. cit., pág.90.

⁴¹ REYES VIZCAÍNO, P., “El derecho de las personas jurídicas en la Iglesia”, en <http://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-de-personas/las-personas-juridicas-en-la-iglesia> [Consulta: 4 de diciembre de 2015]

*reconocimiento como patrimonio cultural de los bienes eclesiásticos no supone en modo alguno la pérdida o merma de su capacidad religiosa prístina; pues, antes que opuestas, conjugan sin conflicto su doble calidad.»*⁴²

En efecto. La larga supervivencia del culto católico ha llevado a que, con el paso de los épocas y la evolución de las necesidades de la Iglesia, el valor de culto de los inmuebles eclesiásticos, portador desde siempre de un notorio valor artístico, haya tenido que ir absorbiendo otros valores diferentes, desde el valor netamente instrumental asignado a la reunión de los cristianos que se encuentra en el origen de los primeros edificios religiosos hasta el valor teleológico derivado del propósito del donante de los legados medievales a favor de la Iglesia o el posterior valor fuertemente intencionado nacido en el periodo de la Contrarreforma; de hecho, esta triple integración apreciativa se recogió en las conclusiones de las II Jornadas Nacionales de delegados diocesanos, celebradas en El Escorial el 3 y 4 junio de 1983, al determinar que el valor de culto satisfacía las necesidades tanto del servicio religioso como las derivadas de la propagación y evangelización y de la voluntad sagrada del donante.⁴³

Esta longevidad de la Iglesia católica en el tiempo es casi única; pocos son los ejemplos que existen en el orbe europeo de edificios monumentales que, como la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, se hayan mantenido desde el siglo IV hasta nuestros días al servicio de la misma institución y de la misma religión y, por ende, de los mismos símbolos y de los mismos objetivos y puedan mostrar por tanto, grabado en su piedra y en su madera, la evolución del valor de culto.

Creemos pues necesario aportar un brevísimo recorrido por la historia que analice las sucesivas y continuadas incorporaciones de inmuebles al rito católico con intenciones, uso y finalidades que han ido inevitablemente renovándose durante casi mil setecientos años.

a) la formación del patrimonio inmueble asignado al culto

⁴² RODRÍGUEZ DOMINGO, JM., “La gestión del patrimonio eclesiástico en el ámbito local”, *Repositorio Institucional de la Universidad de Granada*, Universidad Internacional de Andalucía, 2009, pág. 243.

⁴³ El canon 1267 establece que las oblaciones hechas por los fieles para un fin determinado sólo pueden destinarse para ese fin.

Hervada considera que «*el patrimonio eclesiástico nace casi con la misma Iglesia*»⁴⁴, aunque hasta el Edicto de Milán del 313 d.C. y a causa de las persecuciones, no comienza a organizarse establemente.

La legalización del culto trajo consigo la necesidad de espacios que congregaran a los fieles y se acudió a las basílicas donde se había impartido justicia y en las que se habían celebrado reuniones civiles. Razones de economía práctica, basadas en la rápida adaptación de modelos edilicios existentes a través de la supresión o la reinterpretación de los emblemas paganos, llevaron a añadir a la inicial tipología basilical una nave lateral que vinculara la planta del edificio con el símbolo de la nueva religión.

Desde las primeras comunidades cristianas, la propiedad de los bienes eclesiásticos aparecía siempre con un específico carácter corporativo, de pertenencia al *corpus eclesiástico*. Se trataba, como explica Fornés⁴⁵, de una concepción comunitaria del patrimonio en la que lo que predominaba era el derecho colectivo del grupo por encima del derecho individual de cada miembro.

El patrimonio eclesiástico se organizó entre los siglos VIII y XII sobre una estructura territorial local a cargo del obispo. Se dividía en cuatro partes: una destinada al obispo, otra destinada al clero de la diócesis, otra a los pobres y la cuarta o *portio fabricae*, destinada una parte al mantenimiento del edificio, *sarta tecta*, y la otra, *luminaria ecclesiae*, al ejercicio del culto.

Las sucesivas construcciones de templos y la ausencia de un verdadero interés de asignar la *portio fabricae* trasformaron a esta última en *beneficium indistintum*.

Cuando aumenta la masa patrimonial por donaciones de fieles para la erección de iglesias monumentales surgieron las *fabbricerie*, personas jurídicas encargadas de la administración de la parte del patrimonio de una iglesia destinada al sostenimiento del edificio y a los gastos del culto.

En el mismo período se consolidó el sistema del *beneficio eclesiástico*.

⁴⁴ HERVADA, J., “La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico”, *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho canónico y afines*, tomo 1, Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 1991, pág.181.

⁴⁵ FORNÉS DE LA ROSA, J., “Régimen jurídico patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa”, *Ius canonicum*, vol. 36, nº71, Ciudad de México, IX Congreso Internacional de Derecho canónico sobre *La libertad religiosa*, 1995, pág.18.

Las *capellanías* o *beneficios eclesiásticos* eran instituciones de carácter piadoso que consistían en una fundación testamentaria de bienes, dinero o bienes raíces, que se ponía en renta y que obligaba con sus ganancias al capellán a prestar su trabajo religioso, particularmente en forma de misas, para la salvación del alma del testador y el bienestar espiritual de su familia y allegados.

Este patrimonio aumentó considerablemente a lo largo de la Edad Media y Moderna debido a la difusión del sistema de capellanías, a la liberalidad de los fieles y de los príncipes y a la propia legislación eclesiástica que evitó su dispersión a través de la exigencia de autorización del superior para la enajenación de los bienes.

Con las *causas pías* o fundaciones surgieron los llamados patrimonios eclesiásticos institucionalizados.

Se trataba de masas patrimoniales constituidas por bienes privados y sus rentas que generosamente entregaban los creyentes a fin de atender acciones caritativas en el ámbito geográfico o familiar del donante. Éste especificaba las condiciones para designar al patrón, casi siempre el familiar más cercano, el cual administraba los bienes del patronato y se encargaba del fiel cumplimiento de los fines del mismo.

De esta forma, capellanías y patronatos se convirtieron en censualistas, pues los patronos contrataban los censos a favor de la institución que representaban y percibían una asignación anual. Tanto los bienes de las unas como los de las otras, desde el momento en que quedaban instituidas, pasaban a ser un todo indivisible, patrimonio de la Iglesia como propiedad vinculada al fin de culto determinado por el donante y que, en la mayor parte de los casos, no se podían enajenar sin el citado permiso de las autoridades eclesiásticas.

Las emergentes ciudades de los siglos XII, XIII Y XIV desarrollaron también un papel fundamental en la constitución del ingente patrimonio edificado de la Iglesia.

Aroca expone que las magníficas catedrales levantadas en el periodo perseguían un fin referencial de intenciones comerciales. Su erección suponía «*un desmedido esfuerzo social sin ninguna finalidad material directa*»⁴⁶ excepto la demostración del poder superior de una urbe sobre otra. Atraían a su entorno al mercado y a los diferentes

⁴⁶ AROCA HERNÁNDEZ-ROS, R., op. cit., pág.166.

gremios vinculados con las transacciones y el edificio se convertía en el importante aglutinador urbano de la actividad mercantil. Sus grandes dimensiones se justificaban por este prepotente valor simbólico más que por la afluencia de fieles pues sólo algunos ritos solemnes se celebraban en su interior y el culto religioso habitual se desarrollaba en las vecinas iglesias parroquiales.

Al margen de estas incorporaciones pasivas al patrimonio eclesiástico, la Iglesia fue durante muchos siglos mecenas del arte y protectora de los artistas.

El papado además asumió las tareas de conservación y protección de las antigüedades.

Pío II en la bula papal *Cum alman nostram urbem*, publicada en 1462, estableció la distinción entre monumentos y antigüedades y defendió su conservación pues conferían adorno y encanto a la ciudad y lo que era aún más relevante «*permitían percibir mejor la fragilidad de las ocupaciones humanas.*»

Sixto IV, en su largo papado entre 1471 y 1484, se volcó en una fuerte actividad urbanística para la que necesitó materiales de construcción y derogó el decreto que protegía los monumentos antiguos. Pero a pesar de ello, definió las primeras reglas de expropiación de obras de arte por causa de utilidad pública y publicó el primer edicto contra su exportación.⁴⁷

Las grandes arquitecturas del renacimiento y del barroco se construirían por encargo y financiación de figuras relevantes que, como Sixto V, Clemente VIII, Pablo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Inocencio X y Alejandro VII, asignaban a la magnificencia de sus edificios la función de propagar la fortaleza de la Iglesia triunfante universal nacida tras las 25 sesiones del Concilio de Trento entre 1545 y 1563.

El patrimonio eclesiástico, fragmentado en distintas entidades jurídicas, llegó al Código Canónico de 1917 que en el canon 1499 declaró que «*el dominio de los bienes pertenece, bajo la suprema autoridad de la Sede Apostólica, a la persona moral que legítimamente los hubiese adquirido.*» Precepto codicial que prácticamente se reprodujo idéntico en el canon 1256 del Código vigente: «*El dominio de los bienes corresponde,*

⁴⁷ Unos siglos después el *Quirógrafo sobre la conservación de los monumentos y sobre la producción de bellas artes* de Pío VII de 1802 supuso la base del célebre *Edicto sobre las antigüedades y las excavaciones* del Cardenal Camarlengo Pacca de 1820, el cual, con sus disposiciones en materia de excavación, de conservación y de circulación de las obras de arte antiguas y modernas, está considerado como uno de los fundamentos de la legislación moderna en materia de bienes culturales.

bajo la suprema autoridad del Romano Pontífice, a la persona jurídica que los haya adquirido legítimamente.»

b) los bienes preciosos

En el derecho romano, se consideraban *res extracomercium divini iuris* la *res publicae*, las cosas del pueblo romano que se reservaban al uso religioso como los templos o los altares; *la res sanctae*, las cosas que estaban bajo la protección de los dioses como las murallas y puertas de la ciudad y la *res religiosae*, los sepulcros. Esas funciones vinculadas al culto las excluía de todo tráfico y titularidad.

Aunque en el seno de la Iglesia el término de bien cultural es reciente, desde su primera codificación existe una sensibilidad hacia ciertos bienes especiales respecto a otros comunes. Y así, el Código de 1917 registra la existencia de bienes que responden al concepto de *res sacra et pretiosa* en su masa patrimonial a los que, sin embargo, no define. En cualquier caso, los bienes preciosos no lo eran sólo por su valor artístico si es que lo tenían sino que también podían considerarse como tales los bienes de especial respeto en la piedad popular y los ex votos. Indica Carrasco Terriza⁴⁸ que estos últimos, además de *res sacra* por razón de su consagración como testimonio de gratitud del vovente y de su potencialidad evangelizadora y de *res pretiosa* en muchos supuestos por su elevado valor económico al haber sido realizados en materiales preciosos y encargados a artistas reconocidos, portan un importante interés etnográfico en tanto objetos de interés para el conocimiento de las costumbres y de la actividad y de la mentalidad del hombre en el pasado.

El asunto de su salvaguarda y protección no toma carta de naturaleza en la legislación canónica hasta el Código Canónico de 1983, y ello en varios cánones referentes a la autorización para enajenar en el 638.3 y en el 1292.2, a la seguridad en su conservación en el 1220.2, a la prescripción en el 1270 y en el canon 1283.2 al tratar de los inventarios.⁴⁹ Parece, no obstante, que la referencia a lo precioso en estos cánones responde exclusivamente a la categoría de bienes muebles.

⁴⁸ CARRASCO TERRIZA, M., “Exvoto”, *Diccionario General de Derecho Canónico*, v. III, Pamplona, Aranzadi - Instituto Martín de Azpilicueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, 2012, pp. 882 y ss.

⁴⁹ Canon 638.3: «..... Pero si se trata de una operación en la que se supere la suma determinada por la Santa Sede para cada región, o de bienes donados a la Iglesia, a causa de un voto, o de objetos de gran precio por su valor artístico o histórico, se requiere además la licencia de la misma Santa Sede.»

c) consideraciones actuales de la Iglesia sobre el valor cultural de los bienes eclesiásticos

La Iglesia, además de estimar que el valor de culto de sus inmuebles cumple con los objetivos a los que se dedica y citados anteriormente en el canon 1254, ha incorporado en su interpretación actual conceptos modernos.

Con el Motu Proprio *Inde a Pontificatus Nostri initio*, promulgado en 1993, nació la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia en sustitución de la Pontificia Comisión para la Conservación del Patrimonio Artístico de la Iglesia, creada cinco años antes en el ámbito de la Congregación para el Clero.⁵⁰

Además de crear la nueva Comisión, el documento reflejaba el punto de vista de la Iglesia sobre el valor cultural de sus bienes de culto pues vinculaba la fe con la cultura y supeditaba la segunda a la expansión pastoral de la primera.⁵¹

Esta perspectiva la recogió la Comisión en 1994 y en su *Documento sobre los bienes culturales de los institutos religiosos* estableció que los bienes culturales de la Iglesia no eran sólo bienes a conservar sino más bien tesoros para divulgar y utilizar como nuevo instrumento de apostolado, vehículos de cultura y de evangelización convertidos

Canon 1220.2: «Para proteger los bienes sagrados y preciosos, deben emplearse los cuidados ordinarios de conservación y las oportunas medidas de seguridad.»

Canon 1283.2: «Hágase inventario exacto y detallado, suscrito por ellos, de los bienes inmuebles, de los bienes muebles tanto preciosos como pertenecientes de algún modo al patrimonio cultural, y de cualesquiera otros, con la descripción y tasación de los mismos; y compruébese una vez hecho;»

Canon 1270: «Los bienes inmuebles, los bienes muebles preciosos y los derechos y acciones, tanto personales como reales, que pertenecen a la Sede Apostólica prescriben en el plazo de cien años; los pertenecientes a otra persona jurídica pública eclesiástica, en el plazo de treinta años.»

Canon 1292.2: «Si se trata, en cambio, de bienes cuyo valor es superior a la cantidad máxima, o de exvotos donados a la Iglesia, o de bienes preciosos por razones artísticas o históricas, se requiere para la validez de la enajenación también la licencia de la Santa Sede.»

⁵⁰ La nueva Comisión pasó entonces a ser un organismo independiente con su propio Presidente aunque manteniendo las mismas competencias que la anterior: presidir la tutela del patrimonio histórico y artístico de toda la Iglesia; colaborar en la conservación de este patrimonio con las Iglesias particulares y los respectivos organismos episcopales y promover una sensibilización cada vez mayor en la Iglesia sobre estos bienes.

⁵¹ Motu Proprio *Inde a Pontificatus Nostri initio*, Ciudad del Vaticano, 25 de marzo de 1993, Prólogo: «la fe se ha manifestado en formas artísticas y testimonios históricos con gran fuerza evangelizadora y con un valor intrínseco, a los que la Iglesia está invitada a prestar gran atención.»

en testigos elocuentes de la fe de la Iglesia.⁵² La propia existencia de la Comisión, con autonomía jurídica y orgánica, ponía de manifiesto la importante acción de la Iglesia en favor de la cultura, acción a la que todo el *Pueblo de Dios* estaba llamado a aportar su contribución.

En el mismo documento, la Comisión analizaba la situación de sus edificios e insistía en que el valor de sus bienes no debía medirse desde un interés meramente arqueológico, histórico o artístico sino desde un contexto religioso fiel a su matriz original.

Dirigido a todas las instituciones eclesíasticas, el texto aportaba criterios concretos de actuación y manifestaba la importancia de contar con personal religioso formado en la gestión de bienes culturales.

Un segundo documento de la Comisión Pontificia, la *Carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesíasticos* de 2001, concretó las características de lo artístico, lo conmemorativo y lo identitario que, desde la óptica católica, integraban el valor de culto y que podemos resumir en los siguientes aspectos:

- el valor conmemorativo de sus edificios es un valor activo dentro de su mensaje y misión y abierto hacia las aportaciones de las generaciones venideras a diferencia de lo que pudiera significar lo conmemorativo como un valor estancado en el tiempo que trae a la actualidad recuerdos de un momento triunfal obsoleto. La memoria cronológica expresa «la voluntad por parte de la comunidad de los creyentes, y en particular de las instituciones eclesíasticas, de conservar desde la edad apostólica los testimonios de la fe»⁵³ además de su unidad y continuidad hasta los tiempos actuales de la historia por lo que aporta una lectura espiritual de los sucesos pasados en el contexto de la salvación de las almas, *eventum salutis*, y urge a lo que aún queda por recorrer hasta la expansión universal del cristianismo, *ut unum sint*. La interpretación de lo conmemorativo se basa, por tanto, en escalones sucesivos y consolidados de un recorrido que aún no ha

⁵² Comisión Pontificia de los bienes culturales, *Documento sobre los bienes culturales de los institutos religiosos*, Roma, 10 de abril de 1994, Prólogo de la Declaración: «Les Biens culture sont des témoignages privilégiés de toute cette activité catholique et spirituelle. C'est pourquoi ils sont considérés non seulement comme des éléments d'intérêt anthropologique et social, mais surtout comme expressions remarquables d'une foi qui grandit dans l'Eglise et trouve des manifestations toujours plus adaptées pour exprimer sa vitalité intérieure.»

⁵³ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, *Carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesíasticos*, Roma, 15 de agosto de 2001, pág. 9.

finalizado y difiere así del valor rememorativo de Riegl y del de archivo concluso de Choay que hemos analizado.

- el valor intencionado es fuertemente un valor de contemporaneidad asignado por cada contexto social que lo convierte en un valor instrumental esencial de la pastoral pues *«permite redescubrir el camino de la fe a través de las obras de las diversas generaciones»* y *«traza el cursus de la vivencia eclesial.»*

Se concreta *«en las obras humanas que han modelado el ambiente según las exigencias espirituales»* por lo que sirven a *«la actualidad de la vivencia cultural, caritativa y educativa de las comunidades cristianas, que han precedido a las actuales bajo el signo de la única fe.»*⁵⁴

- el valor artístico es también un valor histórico que *«manifiesta la capacidad creativa de los artistas, los artesanos y los obreros que han sabido imprimir en las cosas sensibles el propio sentido religioso y la devoción de la comunidad cristiana.»*⁵⁵ El objetivo de su manifestada belleza es percibir lo sacro a través de *«procesos creativos humanos dirigidos a expresar la gloria de Dios.»*⁵⁶

- supone un testimonio etnográfico en tanto que *«transmiten a la sociedad actual la historia individual y comunitaria de la sabiduría humana y cristiana, en el ámbito de un territorio concreto y de un período histórico determinado.»*⁵⁷

- carece del carácter excluyente propio de lo identitario puesto que la vocación universal derivada de la propia dimensión ecuménica del mensaje cristiano hace que, aunque patrimonio específico de la simbología cristiana, pertenezcan, de alguna manera a toda la humanidad. Su fin *«está dirigido a la misión eclesial en el doble y coincidente dinamismo de la promoción humana y de la evangelización cristiana»* que manifiesta *«la obra de inculturación de la fe»* lo que permite que *«cada uno pueda disfrutarlos sin*

⁵⁴ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, ibíd., pág.9

⁵⁵ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, ibíd., pág.3

⁵⁶ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, ibíd., pág.9

⁵⁷ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, ibíd., pág.3

*convertirse en el propietario exclusivo.»*⁵⁸ De hecho, lo identitario es contrario a la intención expansionista de la Iglesia.

El documento enumeraba además las circunstancias y funciones del lugar eclesial al que diferenciaba radicalmente de lo que llamaba lugar turístico-cultural porque es *«parte integrante de la misión de la Iglesia en el pasado y en el presente; testimonio de la actividad de la Iglesia a través del descubrimiento de las obras de arte dirigidas a la catequesis, al culto y a la caridad; signo del devenir histórico y de la continuidad de la fe, expresión de fe de los autores y del sensus fidei de la comunidad así como resto de las múltiples situaciones sociales y de la vivencia eclesial, destinado al desarrollo actual de la obra de inculturación de la fe.»*⁵⁹

d) el patrimonio inmaterial asociado al culto

Creemos que, tras el análisis anterior, cabe afirmar que la Iglesia estima el valor de culto de sus inmuebles por su estrecha ligazón con valores inmateriales, espirituales, que carecen de entidad física, e incluso el valor artístico o histórico de un edificio lo tasa desde esa perspectiva de valores intangibles de lo sacro.

El hecho de que un inmueble aloje un valor de culto impregna al ente material y lo transforma en mera herramienta de valor residual para la realización de unos ritos cuya preservación entra en el ámbito de lo intangible; postura que coincide, como ya hemos citado, con la visión de Giannini para quien el hecho de ser cultural convierte automáticamente al bien en elemento de intereses inmateriales, con independencia de que se muestre en un soporte físico concreto o de que esté unido de manera inseparable a una materia⁶⁰ o con la de Vaquer Caballería que considera impropio el dualismo entre el patrimonio material y el inmaterial pues, a su juicio, son las técnicas de fomento y protección las que difieren de uno a otro y no las diferencias formales en las que uno u otro se manifiesta.⁶¹

⁵⁸ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, *ibíd.*, pág.3

⁵⁹ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, *ibíd.*, pág.9

⁶⁰ GIANNINI, M.S., *op. cit.* pág.31.

⁶¹ VAQUER CABALLERÍA, M., *op. cit.*, pág.94.

La liturgia católica es una creación viva, transmitida de generación en generación, que se renueva y adquiere valores sensibles diferentes cada vez que ocurre su hecho y que manifiesta su singularidad en muchos otros factores difusos más allá de la simbología.

I.2. La confluencia de valores

La doctrina ha elaborado distintas teorías sobre la convivencia de ambos valores en el mismo objeto que podrían resumirse en tres orientaciones diferentes. Una sería la de los que consideran que el culto y la cultura son valores en competencia y discute si puede hablarse de prevalencia entre ellos y de si esta prevalencia responde a criterios objetivos o subjetivos; otra que aboga porque la vinculación de un concepto con el otro es nula y se trata de una mera coincidencia, por razones históricas, de un valor cultural en muchos de los inmuebles eclesiásticos. Y por último, la postura doctrinal que defiende que tanto el culto como la cultura son expresiones independientes de una única significación cual es el valor de civilización. Las analizaremos por separado.

a) Valores en competencia

El valor de culto y el valor cultural son dos variables en conflicto que inciden conjuntamente sobre el bien. En esa concurrencia litigiosa, puede defenderse un orden objetivo de prelación de un valor sobre otro o por el contrario, una paridad de rango de valores cuyo grado de apreciación depende del sujeto concedente del valor:

- preeminencia objetiva del valor de culto sobre el valor cultural porque el grado de utilidad del bien para satisfacer las necesidades del culto es pleno y esencial, además de causa que lo convierte en un bien eclesiástico. El valor cultural es un valor añadido que introduce en el bien una utilidad marginal y como utilidad marginal está asignada a un fin de menor prioridad que el anterior.

Fornés considera que el carácter inviolable del lugar de culto establece una limitación o servidumbre legal sobre el inmueble que obliga a respetar su propio destino a todos, principalmente al propietario, a los adquirentes por cualquier título y a los poseedores.⁶² Ninguna intervención, mucho menos una del Estado, puede cambiar su destino al ejercicio del culto y la regulación corresponde a las confesiones religiosas.

⁶² FORNÉS DE LA ROSA, J., op. cit., pág.33.

En este mismo sentido, establece González Merlano⁶³ que el valor cultural de los bienes del patrimonio histórico artístico de la Iglesia consiste en un suplemento histórico, artístico y/o estético acumulado por circunstancias de la evolución de las sociedades, pero secundario y sobrepuesto a su valor de culto que es en esencia el que, con el paso del tiempo, ha generado el valor cultural del bien, por lo que en ningún caso éste puede condicionar o disminuir su función eclesial.

De forma categórica, opina Martínez Blanco que el fin único de *«los bienes culturales de la Iglesia Católica, es su destino al culto o en su sentido más amplio a una función religiosa. Para este fin concreto nació a lo largo de los siglos este patrimonio por donación de los fieles o adquisición de los entes eclesiásticos. Cometeríamos un atentado contra su naturaleza si con ocasión de su función cultural, que la tiene innegable, perjudicamos esta esencial función de culto o sentido religioso.»*⁶⁴ Son bienes teleológicos, impregnados por su valor de culto.

La Iglesia, de hecho, como hemos comentado anteriormente, afirma que el valor cultural de sus bienes es un elemento más que facilita sus labores apostólicas y se encuentra, por tanto, supeditado al valor de culto.

Rodríguez Domingo considera que *«la validez religiosa de bienes que aparentemente la han perdido o alterado no siempre se sustituye por un valor únicamente cultural; en primer lugar, para la institución eclesiástica se mantiene su carácter histórico, susceptible de valoración religiosa. Pero además, el bien puede ser objeto de una revaluación futura, como consecuencia de la trayectoria temporal de la Iglesia, que le lleve a recuperar su sentido religioso original.»*⁶⁵

En definitiva y desde esta óptica, el valor de culto es permanente e imanente al edificio mientras que el valor cultural puede ser transitorio; postura que de alguna manera coincide con la opinión de Giannini cuando, en su ya citado célebre estudio, considera que el valor cultural tiene historicidad, *«sufre una evolución interna derivada del cambio a lo largo del tiempo de lo que se ha dado en llamar los gustos y las concepciones y que según una difundida opinión sería el cambio de las mismas*

⁶³ GONZÁLEZ MERLANO, G., “La protección del Estado a los bienes culturales privados. Aplicación a un caso concreto”, 2009, pág. 4, <http://www.libertadreligiosa.org/articulos/bienes culturales.pdf>

⁶⁴ MARTÍNEZ BLANCO, A., *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado Español*, vol. 13, Madrid, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Justicia de España, 1997, pág.225.

⁶⁵ RODRÍGUEZ DOMINGO, JM., op. cit., pág.245.

estructuras mentales» y hace referencia al carácter despectivo con el que nacieron los términos *gótico* o *barroco*; también a la tardía apreciación del *jardín inglés*, la *escultura griega* del s. V a.d.C o la *arqueología precolombina*.⁶⁶

- preeminencia objetiva del valor cultural sobre el de culto porque el valor cultural está asignado al bien por toda la colectividad como portador de aspectos simbólicos del pasado que deben preservarse para el futuro. Si se abre un conflicto entre el valor de culto y el valor cultural, prevalecería el cultural en tanto legado recibido cuyo disfrute ha de ser universal y permanente en el tiempo y en el espacio.

Con independencia de su titularidad pública o privada así como de los usos que el titular le haya asignado, sea el culto, la representación o el goce privado, el bien cultural ha de ser accesible y disfrutado por todos y estas cualidades son prioritarias a cualquier otra.

Es la teoría de la *propiedad dividida*⁶⁷ entre cosa e interés que distingue de un lado al objeto eclesiástico como soporte físico y de otro al bien como una determinada utilidad del mismo. El objeto pertenece al propietario, la Iglesia, pero al poseer una utilidad de fruición colectiva es el Estado quien debe velar por ella. Y de aquí también nace la unanimidad doctrinal en considerar que, en caso de expropiación o adquisición preferente por el Estado de un bien cultural, el objeto de la misma es sólo el bien patrimonial y no el bien cultural que ni pertenece al particular ni puede pasar al Estado por el ejercicio de facultades extraordinarias.

Ciertos autores consideran que el valor de culto puede extinguirse, mientras que el valor cultural, una vez establecido, genera la obligación eterna de mantenerlo. Ocurre en los edificios desacralizados de la Iglesia persistiendo, no obstante, su valor cultural. Incluso puede naturalmente suprimirse del bien con el transcurso del tiempo y el cambio de culto; un ejemplo claro de ello es el Partenón en el que los valores de cultos sucesivos que se le asignaron tanto en la Grecia clásica como después, cuando se le transformó en iglesia cristiana y más tarde en mezquita, han desaparecido permaneciendo su valor cultural original de referencia de la arquitectura clásica griega del siglo V a.d.C.

- no puede hablarse de prioridad objetiva sino de jerarquía subjetiva establecida por grupos diferentes. Ambos valores son equivalentes en su cualidad simbólica y representan de forma similar la trascendencia asignada por una comunidad a

⁶⁶ GIANNINI, M.S., op. cit., pág.29.

⁶⁷ RODRÍGUEZ DOMINGO, J.M., op. cit., pág.246.

características espirituales, intelectuales y emocionales compartidas, trascendencia a la que el Estado laico denomina valor cultural y el colectivo religioso valor de culto.

En esta posición subjetiva de conflicto de comunidades y asignaciones de valores, hay posturas que proponen un consenso de actitudes. Siguiendo el análisis que establece Aldanondo Salaverría⁶⁸, el Estado tiene que interpretar el valor cultural que aplica a los bienes culturales civiles cuando se trata de bienes de la Iglesia respetando el valor de culto y absteniéndose de cualquier actuación que menoscabe o niegue la existencia de ese valor. La Iglesia a su vez, en el ejercicio de su misión, no puede, en aras del valor de culto, oponerse a las exigencias del valor cultural de sus bienes; de alguna manera, debe producirse un cambio de roles que haga al Estado olvidar su laicidad cuando se refiere al patrimonio de la Iglesia y a la Iglesia olvidar su religiosidad cuando se refiere a su patrimonio histórico artístico.

Teorías más radicales consideran que el conflicto de valores se resuelve naturalmente con el posible ejercicio acreditado de un derecho de accesión de un valor y una comunidad sobre el otro valor y la otra comunidad, particularmente si se trata de bienes con significativo valor de culto o de bienes con significativo valor cultural.

En este sentido, el valor de culto, que es mucho más antiguo que el valor cultural, ha sido fagocitado muchas veces a lo largo de la historia por otros valores como el valor político o el valor representativo de un bien. Pero incluso hoy, reconocido *urbi et orbi* el valor cultural y el valor de culto en múltiples declaraciones universales de la UNESCO, ratificadas casi unánimemente por todos los países, encontramos ejemplos recientes de subordinación absoluta de uno a otro, incluso hasta su supresión del bien, que hace entrar en juego la atrevida propuesta de la accesión.

La calificación de un bien como portador de un extremo valor cultural permite al Estado, en nombre de la colectividad que es el titular universal del bien, hacer suyo el valor de culto y *«todo aquello unido o incorporado al objeto cultural»*, natural o artificialmente, en calidad de accesorio y de modo inseparable. Desde el ángulo contrario, la asignación a un bien de un extremo valor de culto por su titular permite al propietario del bien someter a la función religiosa *«todo aquello unido o incorporado al objeto de culto.»*⁶⁹

⁶⁸ ALDANONDO SALAVERRÍA, I., “El patrimonio cultural de las confesiones religiosas”, *Revista catalana de Derecho Público*, nº 33, 2006, pág.151 y ss.

⁶⁹ Un ejemplo de extremo valor cultural que anula al de culto es la roca de Uluru. Lugar sagrado para los aborígenes australianos y desde 1987 es Patrimonio de la Humanidad, comporta un ancestral valor de culto, además de un importante valor de patrimonio natural pues es uno de los mayores monolitos de

b) Valores complementarios

No existe ninguna relación entre el valor de culto y el cultural porque el objetivo en la evaluación es diferente. El hecho de que ambos representen conceptos protegidos del ordenamiento no presupone ni una conjunción ni una disyunción de fines, de la misma manera que no puede deducirse una relación directa y obligada entre el valor cultural o el valor de culto con otros valores constitucionales como el valor democrático o el valor representativo. Generan consecuencias jurídicas distintas para el bien.

El valor de culto es una característica íntimamente asociada al bien eclesiástico, a su ser objeto de propiedad, mientras que el valor cultural es una carga sobre la propiedad del bien que deriva de la función social con la que los ordenamientos modernos interpretan la propiedad; carga que puede asimilarse a una servidumbre en las facultades dominicales de disposición y de uso y disfrute, o a una funcionalización obligatoria del bien al servicio de un objetivo constitucional o a una afectación parcial del mismo, obviando su titularidad, al uso y servicio público cultural.

Giannini caracterizaba la naturaleza jurídica de los bienes culturales en torno a su *immaterialidad* y a su *publicidad*, exigida esta última no en cuanto bien dominical, sino como objeto de fruición. «*El bien cultural es jurídicamente distinto de la entidad material a la que se incorpora aunque no siempre es posible identificarlos de forma separada; es autónomo a otros valores de la cosa, en particular, a su valor económico.*»

El fin de culto ha constituido la razón por la que la Iglesia ha atesorado un patrimonio al que el devenir de los siglos ha asignado una nueva competencia, la función cultural. Y en tanto que función y no fin, la Iglesia tiene que reconocer y compartir con el Estado las tareas técnicas específicas que se derivan de esa moderna función: conservación, mantenimiento y divulgación.

arenisca. Su declarado valor cultural ha permitido construir al pie de la roca un inmenso y contemporáneo complejo de hotel que acoge continuamente, con precios extraordinarios, a turistas de todo el mundo a los que se les ofrece la diversión de ascender por la roca profanando el valor de culto que tuvo siempre para los pobladores autóctonos.

El ejemplo contrario de extremo valor de culto que suprime su valor cultural es el de la Mezquita de Damasco. La Gran Mezquita de los Omeyas, considerada el cuarto lugar más sagrado del Islam, fue declarada en 1979 Patrimonio de la Humanidad dentro del conjunto de la ciudad vieja de Damasco. Pero pocos años después, el pavimento de todo el patio central, testigo de la historia de la humanidad de miles de años y claro legado de técnicas ancestrales de empedrado, fue engullido por una gruesa capa de hormigón en masa que aglutinó los tochos de antiquísima piedra; piezas de brillante y nuevo mármol cubrieron el espacio y ante las fuertes críticas recibidas por la brutal restauración, se alegó que el edificio era un lugar de culto al servicio de millares de peregrinos en el que cualquier actuación que facilitara su función religiosa estaba justificada.

c) valores independientes

El valor cultural y el valor de culto son términos que representan el mismo concepto superior; esta identidad se justifica con apuntes diferentes:

- el culto y la cultura, su común raíz etimológica de ensalzamiento de valores del espíritu, ya comentada en este análisis, exige, a juicio de Heckel ⁷⁰, estructurar la actividad legislativa y administrativa del Estado de tal modo que éste no renuncie a su responsabilidad cultural en el ámbito del patrimonio cultural de las confesiones religiosas pero, por otra, no olvide ni pase por alto la especificidad religiosa y la función cultural y litúrgica del arte eclesiástico.

- ambos son manifestación de otro valor, un valor de civilización. Ha sido la historia de la civilización la que ha hecho avanzar al culto y al arte de la mano y, por tanto, no puede pensarse en el uno sin el otro.

Hemos ya citado que la primera declaración del Acta de conclusiones de la citada Comisión Franceschini vincula la noción de lo cultural a la de prueba testimonial, entidad representativa de lo que cada civilización en su devenir histórico, y por tanto, la civilización en su conjunto expresa. El término italiano *civiltà* deriva del latín *civitas*, conjunto social, comunidad de individuos caracterizados por sus instruidas formas frente a las toscas de las gentes del campo. *Civilis*, adjetivo de *civis*, miembro de la *civitas*, evoluciona en *civiltà* que se introduce en la lengua italiana en el siglo XIV con un triple significado:

1. de entidad histórica, como conjunto de las formas económicas, sociales, políticas y culturales específicas de un pueblo en un momento determinado.
2. de progreso, desarrollo, como forma superior de organización social conseguida gracias a un desarrollo de conocimientos materiales e inmateriales.
3. de educación, respeto por el otro y espíritu cultivado.

Desde nuestro punto de vista, la Comisión Franceschini utiliza el primero de los tres significados mencionados del término *civiltà* cuando considera integrados en el patrimonio cultural a los bienes «*aventi riferimento alla storia della civiltà*» pues el *riferimento* sólo puede versar sobre algo ocurrido y concluido en el pasado. Aunque como cita Vaquer Caballería⁷¹, no es un *rifereimento* a civilizaciones antiguas sino al

⁷⁰ HECKEL, M., *Staat- Kirche- Kunst. Rechtsfragen kirchlicher Kulturdenkmäler*, Tübingen, 1968, pág.76 y ss.

⁷¹ VAQUER CABALLERÍA, M., op. cit., pág.91.

registro evolutivo con el paso del tiempo de sociedades sucesivas. Sin embargo, cuando la Comisión determina los bienes sujetos a la ley, amplía sus miras a cualquiera «*avente valore di civiltà*» por lo que recurre al segundo y tercero de los significados del término *civiltà* e introduce, pues, la exigencia de exhibir un valor de progreso o un valor de educación.

El Estado, en representación de toda la sociedad, no sólo de la presente, sino también de la pasada y de la futura, y la Iglesia han sido cogestores necesarios del valor de civilización.

I.3. Propuestas de solución del conflicto

Queremos aportar dos propuestas que permiten enmarcar la disputa humanística de valores confluyentes en los inmuebles eclesiásticos catalogados dentro de los márgenes de la propia esencia de la arquitectura y que son, además, los que la distinguen del resto de las artes.

La arquitectura es el único ámbito creativo que ofrece continente y contenido a la simbología de la generación que la erige; en ella confluyen la triple condición de ser arte inmueble que nace con intención de perpetuarse mientras la acción del tiempo en los materiales de construcción lo permitan, de ser arte eternamente necesario más allá de la mera contemplación y del goce artístico y de ser arte capaz de modificar con su presencia un entorno e influir en las pretensiones sensibles de los que lo habitan.

Su singularidad es tal frente a otros bienes que un primer recurso de solución de esa tensión entre el culto y la cultura sería, a nuestro juicio, introducir en la polémica, si se nos permite la personificación, el punto de vista del edificio. Ese *firmitas, utilitas y venustas* original de la piedra y del espacio que pueden, y deben, actuar de árbitros y moderadores del debate porque su atinada conjunción configura de por sí un valor que llamaremos neutro, previo y al margen de asignaciones impostadas por otros actores.

Pero además de esta propuesta del valor neutro del edificio como referente ineludible de la argumentación, queremos recurrir a otro posible criterio de circunscripción del valor de culto y del valor cultural y que se concretaría en la viabilidad actual del valor

instrumental del inmueble fuertemente marcada por la moderna exigencia de sostenibilidad y de impulso del desarrollo regional.

Pasamos a describir brevemente ambos conceptos.

a) el valor neutro del edificio y los plusvalores

Ningún edificio, al contrario de lo que puede ocurrir con otras artes, ha nacido en abstracto; la obra arquitectónica es la conclusión formal de un discurso de contenidos diversos, una amalgama de decisiones creativas a cuyo desenlace queda insertado en el territorio un complejo integral con un valor neutro original.

Llamamos valor neutro del edificio al inscrito en su código genético; ese carácter cerrado de toda obra en su estado de germen que se plasma en una tectónica determinada, en una función determinada y en una estética determinada y que, en nuestra propuesta, se coinvertirían en límites infranqueables y constrictivos de cualquier interpretación del culto y de la cultura. El arquitecto Campo Baeza enumera criterios para identificar lo esencial, la idea inamovible en cada obra arquitectónica; en una deliciosa comparación entre la arquitectura y la poesía, apela a la métrica del edificio, a esa conexión interna y precisa que permite al mecanismo arquitectónico funcionar con unas medidas y proporciones precisas y, sin embargo, vulgarizarse o desvirtuarse con otras.⁷²

Es cierto que la creencia en lo sobrenatural, unida casi siempre a la voluntad de manifestar el poder, fue la causa de la construcción de la mayor parte de los inmuebles eclesiásticos catalogados. Al servicio de ese fin trascendente, respaldado por un consenso social que admitió destinar medios extraordinarios a su edificación, se supeditó el diálogo de los materiales, sus proporciones, el juego de la luz, la incidencia en el medio, las perspectivas internas, la distribución y los recorridos, su imagen externa y, en definitiva, todo lo que constituye el valor neutro de *su firmitas, su utilitas, y su venustas*. Hollis recoge la opinión del arquitecto Adolf Loos quien observó que la arquitectura no tiene su origen en la vivienda sino en el edificio sacro: «*Las casas de nuestros antepasados, que eran respuestas contingentes a sus necesidades en continuo cambio, han perecido. Sus tumbas y templos, concebidos para durar la eternidad de la*

⁷² CAMPO BAEZA, A., *Principia Architectonica*, Research Papers, Columbia University, New York, Mairera Libros, 2012, pág. 19.

*muerte y de los dioses se han conservado y son ellos los que forman el canon de la historia arquitectónica.»*⁷³

Incluso, y para resaltar el protagonismo en el debate de nuestro concepto del valor neutro, podríamos denominarlo valor auténtico, un valor *ab ovo* propio del edificio, portante de significado autónomo artístico y de utilidad con independencia de que ese significado y esa utilidad sean relatados de una manera o de otra y apreciados o no por comunidad alguna.

Porque son, efectivamente, esas narraciones de una voluntad primigenia de culto y de cultura las que difieren a lo largo de la historia. En conclusión, el edificio tiene ese valor neutro *aquí*, en este estadio de la historia, y lo tenía *entonces*, en aquel estadio de la historia en el que se construyó; narrarlo *aquí* no puede consistir en narrarlo *ahora* y modificar lo que tenía *entonces*.

La polémica es pues entre un circunstancial plusvalor de culto y un circunstancial plusvalor de cultura que, en tanto préstamos del valor neutro a las asignaciones de intereses de una sensibilidad concreta en el tiempo, deben respetar escrupulosamente el valor auténtico del edificio, ese que, como venimos reiterando quedó inscrito en la piedra y en la madera, en su *firmitas, utilitas y venustas*.

La Iglesia aporta una pista cuando al admitir la posibilidad de desvincular del culto a un inmueble por, entre otras causas, la inviabilidad de conservarlo, exige que se destine a un uso no sórdido.⁷⁴

También lo hace la ya citada Carta de Venecia de 1965 en su artículo 5 cuando entiende que *«la conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una función útil a lo sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres.»*

⁷³ HOLLIS, E., op.cit., pág.16.

⁷⁴ Canon 1222: *«1. Si una iglesia no puede emplearse en modo alguno para el culto divino y no hay posibilidad de repararla, puede ser reducida por el Obispo diocesano a un uso profano no sórdido. 2. Cuando otras causas graves aconsejen que una iglesia deje de emplearse para el culto divino, el Obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, puede reducirla a un uso profano no sórdido, con el consentimiento de quienes legítimamente mantengan derechos sobre ella, y con tal de que por eso no sufra ningún detrimento el bien de las almas.»*

b) el valor instrumental sostenible

Riegl llamó valor instrumental a ese valor del edificio catalogado que satisface las necesidades materiales contemporáneas y que tiene que tolerar ciertas transformaciones técnicas pues *«con el abandono de la utilización humana se perdería de modo insustituible una parte esencial de aquel libre juego de las fuerzas naturales cuya percepción da origen al valor de antigüedad»*⁷⁵; sin otro uso más que la contemplación estética, el valor cultural quedaría reducido a un valor de conservante y el inmueble equiparado a una nevera congelador.

Por lo demás, el fomento consciente y con empeño del culto a lo perecedero, a la caducidad misma, ha estado siempre fuera del interés de la Iglesia y de su mensaje de pervivencia, modernidad y actualidad.

La ya citada Carta de Atenas 1931 recoge también esas forzosas reformas del inmueble catalogado en el punto 2 justificando *«la ocupación de los monumentos que les aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino moderno sea tal que respete el carácter histórico y artístico.»*

En su punto 3.9 la Carta del ICOMOS de 2003 aboga porque las medidas que se adopten en la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico sean siempre reversibles.

Pero además de las adaptaciones exigidas por la perdurabilidad del inmueble a fin de que mantenga un valor instrumental, los cambios en las costumbres y en los ritos imponen otras alteraciones, resumidas por Riegl en poéticas palabras: *«el valor instrumental tiene que tolerar en cierta medida el valor de novedad.»*⁷⁶

Y así, junto a la implantación de soluciones que satisfagan requisitos actuales de confort- las velas se sustituyen por la electricidad, se habilitan rampas de acceso junto a las escalinatas, se incorpora la calefacción-, aparecen otras derivadas de la propia evolución del culto. En fecha reciente, las modificaciones introducidas en la liturgia tras el Concilio Vaticano II, clausurado en 1965, trajeron una nueva relación del oficiante con los fieles basada en la activa participación en el rito de los asistentes que obligó a la

⁷⁵ RIEGL, A., op. cit., pág.75.

⁷⁶ RIEGL, A., op. cit., pág.93.

reconfiguración del presbiterio con la eliminación de rejas, la instalación de micrófonos en las columnas y la inutilización de múltiples altares situados a los pies de los retablos; desaparecieron también los lugares reservados en las naves y los púlpitos y coros dejaron de tener uso y sentido.

Pero además de todas las anteriores servidumbres, desde las últimas décadas el valor instrumental de un edificio catalogado se ha vuelto tributario de un concepto nuevo introducido por la primer ministra noruega Gro Brundtland en el informe *Nuestro futuro común* presentado en 1987 en la 42ª sesión de las Naciones Unidas al afirmar que «*el desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades.*»

La idea la resumen con gran claridad Prieto de Pedro y Martinell cuando plantean el deber de la generación actual de asumir el compromiso moral de dejar a las generaciones sucesivas, además de una naturaleza disfrutable, un capital cultural rico y diverso, no empobrecido y apelan a una solidaridad intergeneracional e intrageneracional.⁷⁷

Nace el criterio matriz de la arquitectura sostenible que afecta notablemente a la conservación de inmuebles al margen de su valor de culto y de su valor cultural y ello en un doble y ambicioso sentido pues la exigida sustentabilidad del edificio no bascula sólo sobre la utilización de materiales y tecnologías de máximo rendimiento y menor impacto energético y ambiental sino también sobre la capacidad matriz del edificio de inferir en el progreso regional.

El patrimonio cultural eclesiástico debe incardinarse en el marco de posibilidades y potencialidades del lugar donde se ubica y en el funcionamiento social y cultural del medio en el que se inserta. Como sugiere Revert⁷⁸, debe convertirse en un factor que contribuya a la definición del modelo de ciudad, agregándose a la mejora del entorno y potenciando otros elementos patrimoniales, antes que absorber para sí los flujos

⁷⁷ PRIETO DE PEDRO, J. y MARTINELL, A., "Documento de trabajo para la primera reunión de expertos sobre la cooperación internacional", UNESCO, 2007, pág.11.

⁷⁸ REVERT, X., "El patrimonio cultural: entre los ciudadanos y su corresponsabilidad en la gestión", en SÁNCHEZ, E. y RAUSELL-KBSTER, P., *Rehabilitación Patrimonio y Participación*, Valencia, Fundació Pere Compte, 2004, pág.50 y ss.

económicos y entrar en competencia con los servicios prestados por la iniciativa privada o de los municipios colindantes.

La Iglesia acepta esta misión. La Comisión Pontificia, en los dos textos antes analizados, el *Documento sobre los bienes culturales de los institutos religiosos* de 1994 y la *Carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos* de 2001, así lo reconoce. En el primero, considera que muchos de sus edificios se han convertido en puntos de referencia local «*de la cultura, el arte, el urbanismo, la vida social y la civilización.*»⁷⁹ Y, además, recomienda que «*las construcciones monumentales que se encuentran sobre todo en los países de antigua tradición cristiana se pongan a disposición de acciones sociales y culturales al servicio de la población que ayudó en el pasado a construirlas.*»⁸⁰

En el segundo texto, afirma que el museo eclesiástico es un lugar territorial en continuidad física y cultural con el ambiente circundante pues «*los materiales usados para la producción de las múltiples obras hacen referencia a contextos naturales precisos; los edificios producen un indudable impacto ambiental; los artistas y los que encargan las obras están vinculados a las tradiciones que se desarrollan en un lugar determinado; los mismos contenidos de las obras se inspiran y responden a las necesidades conectadas con el hábitat en el que se desarrolla la comunidad.*»⁸¹ A su juicio, conjuntos monumentales, obras de arte, archivos y bibliotecas están condicionados por el territorio, se refieren a él y se pueden convertir en los lugares para el diálogo de las fuerzas culturales presentes en el mismo en un sistema coordinado de manifestaciones que haga evidente la obra realizada por la Iglesia en una región determinada y favorezca la tutela de los bienes culturales en su contexto originario.

⁷⁹ Comisión Pontificia de los bienes culturales, *Documento sobre los bienes culturales de los institutos religiosos*, op.cit., cap. “Bienes culturales y familias religiosas”.

⁸⁰ Comisión Pontificia de los bienes culturales, ibíd., cap. “Iglesias y edificios”.

⁸¹ Comisión Pontificia para los bienes culturales de la Iglesia, *Carta circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos*, op.cit., pág.26.

II. El conflicto jurídico de valores

Creemos importante un breve análisis del marco legal dentro del cual la Iglesia administra sus bienes temporales antes de pasar a interpretar la situación en la que estos quedan cuando la normativa estatal les declara bienes culturales.

Y ello porque la calificación del conflicto legal entre la Iglesia y el Estado tiene diferente trascendencia si éste se refiere a una discusión sobre la titularidad del bien o si se restringe al ejercicio de facultades dominicales.

Las singularidades jurídicas de la Iglesia en tanto entidad hacen que sea imposible cualquier similitud en el enfoque con la posición en la que quedan los titulares particulares de algún bien del patrimonio histórico artístico. Cualquier analogía carece de fundamento por tres razones que consideramos relevantes:

1. La Iglesia dispone de un régimen jurídico propio de sus bienes que, reconocido o no por el Estado, constituye, a su juicio, su marco legal.
2. En los bienes culturales que dedica al culto, la Iglesia hace efectivo el principio constitucional protegido de garantía de la libertad ideológica, religiosa y de culto citado al inicio de este ensayo, ejercicio que no cabe predicar de ningún particular respecto a sus bienes culturales, y que infiere a la Iglesia un estatuto que va más allá de tenedora de hecho del bien, mera poseedora o simple depositaria, en un depósito necesario impuesto por la ley, con obligación de cuidar de la conservación y protección del bien cultural siguiendo las directrices estatales.
3. El volumen e importancia del patrimonio eclesiástico cultural hace que las consecuencias de tal catalogación requieran de unas pautas de examen cuantitativa y cualitativamente muy diferentes a las que se seguirían para juzgar la afectación de bienes concretos de titulares particulares e individuales.

X.1. Régimen jurídico de los bienes en el derecho canónico

El propio ordenamiento canónico en vigor reconoce su posible conflicto jurídico-normativo con el ordenamiento estatal en la remisión general canonizante que supone

el canon 22⁸² por el que la Iglesia debe observar las normas civiles si no contradicen el Derecho divino.

Hay autores que consideran que la remisión es estrictamente supletoria.

A juicio de Velasio de Paolis, al administrador de los bienes de la Iglesia, aunque deba conocer y apreciar el derecho civil de aplicación, le corresponde *«comprender y aplicar cuidadosamente, ante todo, el derecho canónico en todas sus expresiones, sin la preocupación de querer a toda costa plegar el derecho de la Iglesia sobre los bienes temporales —y su significado específico— a la legislación del Estado. Se trataría de una operación profundamente incorrecta, porque el sentido y las finalidades de los dos ordenamientos son distintos entre sí. No es solo una cuestión de técnica o de conocimiento jurídico, sino de mentalidad.»*⁸³

El régimen jurídico de los bienes de la Iglesia se determina en el Libro V del Código Canónico el cual, dividido en cuatro títulos,⁸⁴ establece en los cánones iniciales los principios básicos de referencia en lo que afecta a la titularidad sobre los bienes y a las facultades dominicales de la Iglesia.⁸⁵

⁸² Canon 22 del Libro I *De las normas generales*, Título I *De las leyes eclesiásticas*: «Las leyes civiles a las que remite el Derecho de la Iglesia deben observarse en Derecho canónico con los mismos efectos, en cuanto no sean contrarias al Derecho divino ni se disponga otra cosa en el Derecho canónico.»

⁸³ DE PAOLIS, V., *Los bienes temporales de la Iglesia*, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, Universidad San Dámaso, 2012, pág.23.

⁸⁴ Libro V *DE LOS BIENES TEMPORALES DE LA IGLESIA*
Título I *De la adquisición de bienes*
Título II *De la Administración de los bienes*
Título III *De los contratos, especialmente la enajenación*
Título IV *De las pías voluntades en general y de las fundaciones pías*

⁸⁵ Canon 1254:«1. Por derecho nativo, e independientemente de la potestad civil, la Iglesia católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines.2. Fines propios son principalmente los siguientes: sostener el culto divino, sustentar honestamente al clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de caridad, sobre todo con los necesitados.»

Canon 1255: «La Iglesia universal y la Sede Apostólica, y también las Iglesias particulares y cualquier otra persona jurídica, tanto pública como privada, son sujetos capaces de adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales, según la norma jurídica.»

Canon 1256: «El dominio de los bienes corresponde bajo la autoridad suprema del Romano Pontífice, a la persona jurídica que los haya adquirido legítimamente.»

Canon 1257:«1. Todos los bienes temporales que pertenecen a la Iglesia universal, a la Sede Apostólica o a otras personas jurídicas públicas en la Iglesia, son bienes eclesiásticos, y se rigen por los Cánones que siguen, así como por los propios estatutos.2. Los bienes temporales de una persona jurídica privada se rigen por sus estatutos propios, y no por estos Cánones, si no se indica expresamente otra cosa.»

- la Iglesia es independiente de la potestad civil a la hora de adquirir, retener, administrar y enajenar sus bienes temporales.
- Es sujeto, en todas sus manifestaciones, capaz de todo tipo de actos de disposición y administración de sus bienes.
- Según su carácter, los bienes temporales quedan sometidos al régimen jurídico del Código Canónico o al establecido en sus propios estatutos.

II.1.i. La calificación jurídica de los bienes temporales de la iglesia

a) La titularidad de los bienes

La titularidad de los bienes corresponde, bajo la autoridad suprema del Romano Pontífice, a la persona jurídica que los haya adquirido legítimamente. El precepto del canon 1256 recoge casi textualmente la misma redacción del Código de 1917 que acabó con la polémica anterior sobre la pertenencia de los bienes de la Iglesia que unos atribuían a Dios y otros a los pobres, a los santos o al clero.

Pueden ser titulares la Iglesia universal y la Sede Apostólica, las Iglesias particulares y cualquier otra persona jurídica, tanto pública como privada. La distinción canónica que se establece en el canon 116 entre personas jurídicas públicas y privadas tiene importante trascendencia para el establecimiento del régimen jurídico dominical de los bienes.

Son personas jurídicas públicas las corporaciones y fundaciones constituidas por la autoridad eclesiástica competente para que, dentro de los límites que se les señalan, cumplan en nombre de la Iglesia la misión que se les confía. Adquieren esta personalidad en virtud del mismo derecho o por decreto especial.

Las demás son personas jurídicas privadas que obtienen esta personalidad única y exclusivamente mediante decreto especial de concesión expresa de la autoridad competente.

La diferencia, por tanto, entre públicas y privadas radica en que se les haya confiado una misión concreta.

Canon 1258: «*En los Cánones que siguen, con el nombre de Iglesia se designa, no sólo la Iglesia universal o la Sede Apostólica, sino también cualquier persona pública en la Iglesia, a no ser que conste otra cosa por el contexto o por la naturaleza misma del asunto.*»

La aprobación de los estatutos por la legítima autoridad es condición necesaria para ser asociación pues, en caso contrario, ésta se reduciría a un grupo de fieles; los cánones 310 y 322 prescriben que una asociación privada adquiere personalidad en el reconocimiento de sus estatutos aunque caben asociaciones sin personalidad, que no pueden ser sujeto de derechos y deberes.

b) Los tipos de bienes

-por el titular

Son de dos clases diferentes:

- los bienes eclesiásticos que son los bienes temporales adquiridos por la Iglesia universal, la Sede Apostólica u otras personas jurídicas públicas en la Iglesia.
- los bienes eclesiales que son los bienes temporales adquiridos por una persona jurídica privada.

-por su recepción en el derecho

Una cuestión relevante es la consideración de su naturaleza jurídica a juicio del la normativa civil del Estado en el que se localizan. González Merlano mantiene que en el ordenamiento estatal, los bienes de la Iglesia no son ni bienes públicos ni privados sino bienes recepcionados en la normativa nacional en virtud de un acuerdo internacional. La calificación de un bien en público o privado depende de la consideración que la ley atribuye al titular que ejerce los derechos sobre el bien, con independencia del uso que el mismo titular haga de su bien.

Y en este sentido, la Iglesia católica no es ni una entidad pública ni una entidad privada, pues por su propia naturaleza no depende de ninguna legislación nacional. Su capacidad legal para realizar actos jurídicos válidos en el territorio de una nación deriva de un acuerdo internacional entre la Santa Sede y el Estado respectivo; y, por tanto, *«sus bienes carecen de una calificación específica dentro de cualquier ordenamiento estatal. No son públicos ni privados, son simplemente bienes de propiedad de la Iglesia.»* Ahora bien, cuando no exista un acuerdo de estas características, los bienes de la Iglesia son susceptibles de la calificación correspondiente a su situación jurídica dentro del país, por lo que el autor considera que *«son arrastrados a una calificación normativa por la cual los bienes de la Iglesia serán privados o particulares.»*⁸⁶

⁸⁶ GONZÁLEZ MERLANO, G., op. cit., pág.7.

Pero desde un enfoque exclusivamente económico, puede afirmarse que el valor cultural impuesto sobre un bien eclesiástico priva a éste, en tanto que institucionaliza el derecho al bien de la colectividad presente y futura, de los principios de rivalidad y exclusividad que caracterizan al bien privado⁸⁷.

II.1.ii.Las facultades dominicales

a) Los regímenes jurídicos

El propio Código Canónico establece dos regímenes jurídicos separados:

- el de los bienes eclesiásticos que se rigen por el Derecho canónico.
- el de los bienes eclesiales que se rigen únicamente por sus estatutos propios, aunque estos pueden indicar expresamente otra cosa, entre ellas su sumisión al Derecho canónico.

b) Las normas de disposición y de enajenación

La Iglesia disfruta de plena capacidad dominical sobre bienes temporales, potestad otorgada según el canon por *derecho nativo*, es decir, por un derecho que le es propio independientemente de su aceptación o no por el poder político del Estado, y limitada a la consecución de sus propios fines, fines que hemos ya analizado minuciosamente.

Ese derecho nativo le confiere, al margen de la autoridad civil, facultades para adquirir, retener, administrar y enajenar bienes, en cuanto tiene unos fines necesarios que alcanzar. Y del mismo modo que tiene una competencia propia y exclusiva sobre sus fines institucionales, así también tiene competencia propia y exclusiva sobre los medios temporales necesarios para la consecución de esos fines; el patrimonio de la Iglesia está incorporado, brota de la Iglesia misma.

Nos interesa destacar las normas en las que ese derecho nativo regula las transmisiones de bienes temporales pues en el régimen que establece se introducen conceptos importantes vinculados a los bienes culturales.

⁸⁷ El principio de rivalidad supone que el consumo del bien privado por un consumidor disminuye la disponibilidad de su consumo por otros; el principio de exclusividad significa que es posible impedir a otros consumidores el consumo del bien privado.

El título III de los contratos, especialmente de la enajenación, del Libro V, establece en los cánones del 1290 al 1298 el régimen de las enajenaciones de bienes.

Se establece una remisión general al régimen civil del territorio donde se encuentre el bien, siempre y cuando no sea contrario a las disposiciones del Código, y un régimen de licencias, previo a la enajenación, en base al valor del bien en referencia a unos límites mínimo y máximo definidos por la Conferencia Episcopal, habida cuenta de la conveniencia de adecuar la norma canónica a las circunstancias reales de mercado de cada lugar.

La enajenación de bienes de las personas jurídico públicas requieren licencia de la autoridad competente cuya designación viene definida por el valor del bien a enajenar; también requieren autorización las enajenaciones de las personas jurídico privadas cuando el valor del bien se encuentre entre los límites mínimo y máximo. Por debajo del límite mínimo, la persona jurídica puede enajenar por autoridad propia, cumpliendo los requisitos establecidos en sus estatutos.

Se hace una referencia expresa a que la enajenación de bienes cuyo valor supere el límite máximo fijado por la Conferencia Episcopal o de exvotos o de bienes *«preciosos por razones artísticas o históricas»*, requieren además licencia de la Santa Sede para la validez de la enajenación.

En cualquier caso, la enajenación de un bien de un valor superior al límite mínimo exige que exista una causa justa, y el canon 1293. 1 enumera como tales *«una necesidad urgente, una evidente utilidad, la piedad, la caridad u otra razón pastoral grave»* así como una tasación del bien que se va a enajenar, redactada por escrito por peritos competentes.

El canon 1295 extiende los requisitos a *«cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica»* por lo que puede afirmarse que no sólo los actos traslativos del dominio sino también la constitución de usufructo o de hipoteca o de prenda o la imposición de un gravamen sobre el bien y, en general, cualquier acto o negocio jurídico que disminuya su valor, están sometidos a este régimen.

Si se incumplen estas normas los actos jurídicos son nulos para el derecho canónico; en el supuesto de que fueran civilmente válidos, la Iglesia se reserva en el canon 1296 sopesar el ejercicio de acciones para reivindicar sus derechos.

X.2. Marco jurídico actual

II.2.i.En el derecho comparado

El artículo 12 del Acuerdo entre la Santa Sede y la República italiana de 18 de febrero de 1984 que modifica el Concordato Lateranense de 11 de febrero de 1929, expresa claramente el espíritu de colaboración, cada uno en su materia, entre la Iglesia y el Estado para la tutela del patrimonio histórico y artístico. A fin de armonizar la aplicación de las leyes estatales con las exigencias de carácter religioso, los órganos competentes de ambas partes deben concordar las disposiciones oportunas para la salvaguardia, valoración y disfrute de los bienes culturales de interés religioso que pertenezcan a los entes e instituciones eclesiásticas. La conservación y consulta de los archivos y la biblioteca histórica de las mismas organizaciones e instituciones se fomentarán y facilitarán sobre la base de acuerdos entre las autoridades competentes de las dos Partes. La Iglesia conserva para sí todas las facultades de custodia, mantenimiento y conservación de las catacumbas, además de la posibilidad de nuevas excavaciones y de traslado de las reliquias.

En Francia, el Concordato de 1801, impuesto por Napoleón al Vaticano, perduró a pesar de la restauración. Pero en 1850 la educación fue declarada libre. Durante la Tercera República, el asunto *Dreyfus* desencadenó una oleada de anticlericalismo que llevó a la ley de separación Iglesia-Estado de 1905 y terminó con el Concordato. La ley que enuncia la célebre frase: «*La República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna*» es vista como la columna del laicismo. Puso fin a la financiación de grupos religiosos por el Estado, a pesar de que en el Concordato de 1801 se habían acordado fondos para la Iglesia católica como compensación por las confiscaciones de propiedades realizadas durante la Revolución Francesa. Declaró que todos los edificios religiosos serían propiedad del Estado y de los gobiernos locales aunque se obligaban a ponerlos a disposición de las organizaciones religiosas, sin costo para éstas, siempre que se siguieran usando con fines de culto. La intención explícita de la ley era negar la existencia de una religión avalada por el Estado; su efecto final fue el de incapacitar a la religión católica como una fuerza institucional en la vida pública.

La Kulturkampf, *lucha por la cultura*, alemana desató un fuerte conflicto jurídico-legislativo entre el secularismo y la libertad religiosa y enfrentó al canciller Bismarck entre 1871 y 1878 con la Iglesia católica y con el partido Zentrum de los católicos

alemanes que le llevaron a imponer, en un ambiente de rebosante nacionalismo y de liberalismo anticlerical, medidas muy restrictivas a la Iglesia hasta que se llegó a un pacto con el papa León XIII. El Concordato Imperial de 20 de julio de 1933 entre el Tercer Reich y la Santa Sede, mantenía en vigor los antiguos concordatos con Baviera, Prusia y Baden, y no ha sido sustituido por ningún otro acuerdo global sino por acuerdos con diferentes Land que constituyen el marco jurídico de las relaciones entre la Iglesia católica y Alemania. El Concordato Imperial, además de reconocer el derecho a la libertad religiosa católica romana en el artículo 1, en el artículo 17 garantiza la propiedad y demás derechos de la Iglesia sobre sus bienes.⁸⁸ Como compensación por las expropiaciones sufridas en 1803, la Iglesia sigue recibiendo anualmente una importante cantidad de las arcas del Estado.

En Portugal, el 18 de mayo de 2004 se firmó un nuevo Concordato derogando el anterior en vigor desde 1940. Garantiza el público y libre ejercicio a la Iglesia en sus actividades, en particular el ejercicio del culto y el magisterio. El artículo 22 introduce una referencia expresa a los inmuebles de la Iglesia clasificados como monumentos nacionales o como bienes de interés público y determina que seguirán destinados de modo permanente al culto católico. Al Estado le corresponde su conservación, reparación y restauración conforme a programas acordados con la Iglesia para no perturbar el servicio religioso. A la Iglesia le corresponde su custodia y régimen interno, en particular en el horario de visitas que podrán estar guiadas por funcionarios civiles. Los objetos de culto en museos estatales se cederán siempre para las ceremonias religiosas del templo al que pertenezcan si éste se encuentra en la misma localidad que donde se exponen. Las cesiones se harán a petición de la Iglesia que asumirá el cuidado de los objetos prestados con responsabilidad. Caben también las cesiones temporales por motivos justificados.⁸⁹

⁸⁸ Concordato Imperial de 1933, artículo 17: «*A tenor de las leyes generales del Estado, se garantizarán la propiedad y los demás derechos sobre los propios bienes, de los entes de derecho público, de los institutos, de las fundaciones y de las asociaciones de la Iglesia católica. Por ningún motivo podrá tener lugar la demolición de un edificio dedicado al culto, sin previo acuerdo con las competentes autoridades eclesiásticas.*»

⁸⁹ Concordato entre la Santa Sede y la República Portuguesa de 18 de mayo de 2004, artículo 22: «*1. Gli immobili che, ai sensi dell'articolo VI del Concordato del 7 maggio 1940, erano o sono stati classificati come "monumenti nazionali" o come di "interesse pubblico" restano destinati in modo permanente al servizio della Chiesa. Allo Stato spetta la loro conservazione, riparazione e restauro secondo un piano stabilito d'accordo con l'autorità ecclesiastica, per evitare disturbi al servizio religioso; alla Chiesa spetta la loro custodia e regime interno, segnatamente in ciò che riguarda l'orario delle visite, alla guida*

En conclusión, los bienes culturales de la Iglesia son reconocidos en su propiedad, más o menos declarada expresamente en los concordatos y acuerdos, en Italia, Alemania y Portugal, correspondiendo su tutela al Estado conjuntamente con la Iglesia. Sólo en el acuerdo con Portugal aparece una manifiesta preeminencia del valor de culto sobre el valor cultural por lo que la intervención del Estado en los bienes está supeditada siempre a la decisión de la Iglesia. Francia mantiene una postura única al considerar de alguna manera los bienes culturales dedicados al culto como *établissement public à caractère culturel* y en su concepción del *service publique culturel*, el Estado está obligado a prestar a la Iglesia los bienes para que pueda ejercer su actividad de culto.

II.2.ii. En el derecho español

En España, durante la Edad Moderna se habían producido apropiaciones sucesivas de bienes de la Iglesia desde 1798 con la Reforma de Olavide, la desamortización de Godoy, las confiscaciones de bienes de Bonaparte en 1808, la reducción al tercio del número de monasterios de las Cortes de Cádiz y las desamortizaciones y posterior venta de bienes del clero regular de Mendizábal de 1834 a 1837 y de la Ley de Madoz de 1855.

La Primera Republica se caracterizó por un claro liberalismo y anticlericalismo, luego suavizados por la actitud tolerante de Alfonso XII. Después de la crisis que para la Iglesia representó la Segunda Republica y en la que por ambas partes se consideró derogado el primer Concordato de 1851, con la dictadura de Franco se firmó el Concordato de 1953 en el que se establecían subvenciones a favor de la Iglesia para la construcción de nuevos edificios y mantenimiento de su patrimonio.

En 1976 se suscribió el Acuerdo de revisión del Concordato de 1953 que fue sustituido por los Acuerdos firmados en 1979, dentro del ámbito de la nueva Constitución del Estado español de 1978 que había entrado ya en vigor en el momento de la firma de los Acuerdos

El análisis actual del marco jurídico que se impone a los bienes eclesiásticos del patrimonio histórico artístico se integra por la coexistencia de los citados Acuerdos

delle quali potrà intervenire un funzionario nominato dallo Stato. 2. Gli oggetti destinati al culto che si trovano in un museo dello Stato o di altri enti pubblici sono sempre ceduti per le cerimonie religiose nel tempio a cui appartenevano, se questo si trova nella stessa località in cui i suddetti oggetti sono custoditi. Tale cessione si farà a richiesta della competente autorità ecclesiastica, la quale avrà cura della custodia degli oggetti ceduti, con responsabilità di fedele depositario. 3. In altri casi e per motivi giustificati, i responsabili dello Stato e della Chiesa possono accordarsi circa una cessione temporanea di oggetti religiosi da usarsi nel rispettivo luogo di origine oppure in altro luogo più adatto.»

entre España y la Santa Sede y la posterior Ley del Patrimonio Histórico español de 1985 que ha ido precisando una disciplina sistemática en muchos aspectos. Las atribuciones constitucionales a las Comunidades Autónomas en materia cultural han llevado a éstas a la elaboración de normativas propias así como a la firma de acuerdos concretos de gestión entre los entes autonómicos y las diócesis con territorialidad en las mismas cuyo análisis pormenorizado supera la extensión del presente estudio por lo que nos reduciremos al ámbito general del Estado.

a) Acuerdos entre España y la Santa Sede

En 1979 se firmaron cuatro Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede: el Acuerdo sobre asuntos jurídicos; sobre enseñanza y asuntos culturales; sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos y sobre asuntos económicos.

En ellos aparecen múltiples referencias al régimen jurídico de los bienes culturales de la Iglesia:

-el artículo 1 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos, en sus referencias 1, 2, 3 y 4 reconoce y garantiza el derecho de la Iglesia para ejercer sus actividades de culto, jurisdicción y magisterio así como la personalidad jurídica civil y, por tanto, de obrar de las distintas entidades eclesiásticas en tanto la tengan canónica, existentes en el momento del Acuerdo y las que se creen en el futuro. Las referencias 5 y 6 afectan directamente a bienes eclesiásticos del patrimonio histórico artístico; la 5 garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto que no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado aunque introduce la posibilidad de su expropiación forzosa, oída antes la autoridad eclesiástica competente, y la 6 respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos de la Iglesia.

- el preámbulo del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales señala la importancia del patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia en el acervo cultural de España cuya puesta al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado. Se consagran dos principios: la función social de los bienes de la Iglesia con valor cultural y la necesidad de cooperación entre la Iglesia y el Estado.

Y el artículo 15 del mismo Acuerdo, señala la voluntad de la Iglesia de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y de concertar con el Estado *«las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este*

patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas, en el marco del artículo 46 de la Constitución», a través de una Comisión mixta Iglesia-Estado.

-el preámbulo del Acuerdo sobre asuntos económicos reconoce que el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado por lo que se hace necesario dar *nuevo sentido* a los títulos y al sistema de aportación económica. Sin embargo, en el artículo 15 introduce un trato fiscal beneficioso, con exención total de muchos impuestos, de inmuebles destinados a cualquiera de los fines que la Iglesia reconoce como propios, con escasas excepciones en supuestos de obtención de rendimientos en el ejercicio de explotaciones económicas cuando el uso se haya cedido.

Al margen de otras críticas a los Acuerdos por el régimen privilegiado, muy superior al de las otras confesiones con arraigo en España, que establecen para la Iglesia católica en contra de los criterios constitucionales de igualdad, pluralismo religioso o neutralidad del Estado, los textos son excesivamente generales y no afrontan los problemas técnicos y jurídicos de la propiedad de bienes culturales en manos de la Iglesia.

Aldanondo Salaverría considera que no se hace mención a la función conjunta, cultural y de culto, de muchos bienes eclesiásticos ni tampoco aparece un reconocimiento expreso a la Iglesia del derecho de propiedad sobre esos bienes.⁹⁰

Efectivamente, la redacción de los textos parece referirse a dos tipos de bienes separados: los de culto, de los que no menciona su importancia histórico artística y a los que, exclusivamente por ser lugares de culto y mientras mantengan su afectación al culto, reconoce inviolabilidad, no demolición y exenciones fiscales y los de importancia histórico o artística donde, sin mencionar su valor de culto, insiste en su importante vinculación a toda la sociedad. No se aclara, pues, el debate sobre el conflicto en la concurrencia de ambos valores sobre el mismo bien.

En cuanto al reconocimiento de la propiedad de la Iglesia, si bien parece existir una remisión implícita al Derecho Canónico como norma reguladora de la capacidad de las entidades eclesiásticas sobre sus bienes, para los bienes culturales sólo se alude a compromisos de cooperación entre la Iglesia y el Estado en cuestiones técnicas, entre otras, de conservación, catalogación y disfrute de la sociedad. Las referencias a la Iglesia son de posesión y de limitación de sus facultades exclusivas de disfrute; tampoco

⁹⁰ ALDANONDO SALAVERRÍA, I., op. cit., pág.155.

la mención a una posible expropiación forzosa deja clara la posición jurídica de la Iglesia en sus bienes culturales.

La falta de definición del texto puede tener graves consecuencias posteriores para ambas partes. A juicio de Llamazares, la ausencia manifiesta en el artículo 15 del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales de referencia expresa al patrimonio cultural de la Iglesia puede suponer para éste *«que se somete, por tanto, al régimen común, por un lado; por otro, no se limita el poder unilateral del Estado en relación con él, ya que no queda obligado a consensuar sus decisiones sobre él con la Iglesia, ni mediante acuerdos ni mediante la exigencia del previo consentimiento de la otra parte.»*⁹¹

Ciertas imprecisiones fueron solventadas por la Comisión Mixta Iglesia-Estado, creada en cumplimiento del artículo 15.2 del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, en el Documento relativo al marco jurídico de actuación mixta Iglesia-Estado sobre patrimonio histórico-artístico de 30 de octubre de 1980.

En el primer y segundo criterio del documento, el Estado reconoce:

- la titularidad, *«por cualquier derecho o relación jurídica»* de las personas jurídicas eclesiásticas sobre sus bienes del *«patrimonio histórico-artístico y de las bibliotecas y archivos eclesiásticos»*,
- la labor cultural de la Iglesia en la *«creación, promoción y conservación»* de este patrimonio.
- la función primordial de culto y la utilización para finalidades religiosas de muchos de esos bienes.

La Iglesia se limita a reiterar su intención de defenderlo, conservarlo y divulgarlo.

Respecto a la cooperación Iglesia y Estado, se inspira en los siguientes principios:

- a) respeto del uso predominante de dichos bienes que es el de **culto** y de la utilización preferente por sus legítimos titulares.
- b) coordinación de este uso con el estudio científico y artístico de los bienes y su conservación.
- c) posibilidad de acceso público, manteniendo como prioritario el uso litúrgico, el estudio científico y artístico de dichos bienes y su conservación.
- d) sometimiento de todos los bienes culturales eclesiásticos a las normas de la legislación civil de protección del patrimonio histórico - artístico y documental.

⁹¹ LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Derecho de la libertad de conciencia, II. Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad*, Madrid, Civitas, 2003, pág.189.

e) exhibición de los bienes en su emplazamiento original o natural y cuando ello no sea posible o aconsejable, agrupados en edificios eclesiásticos, formando colecciones o museos donde se garantice su conservación y seguridad y se facilite su contemplación y estudio.

Es de destacar que el reconocimiento sin excepción de la legislación estatal en materia de protección del patrimonio como fuente primaria de regulación puede anular el resto de principios.

La vía de los convenios de colaboración entre la Iglesia y el Estado se ha configurado desde entonces como el instrumento idóneo del ordenamiento jurídico español para encajar las exigencias de ambas partes.

Estas figuras normativas han sido completadas por un conjunto de disposiciones de la propia Iglesia española, a fin de precisar los mecanismos de preservación y tutela de su patrimonio. Entre ellos revisten importancia los textos que, derivados de los acuerdos concordados, fueron propuestos por los delegados de patrimonio histórico-artístico y documental de las diócesis españolas, reunidos en 1981, ante la Conferencia Episcopal.

Los documentos ofrecían el interés de asumir las carencias y necesidades de los responsables eclesiásticos para cumplir con la normativa sobre protección y conservación del patrimonio cultural de la Iglesia. Destacaban la necesidad de la formación histórico-artística del clero y la inmediata aprobación de formularios que permitieran la realización homogénea del inventario de todo el patrimonio cultural eclesiástico. De igual modo se proponía la creación de la Junta Episcopal del patrimonio cultural y la puesta en marcha de las respectivas comisiones diocesanas.

La Conferencia Episcopal redactó en 1982 una circular en la que se señalaban las principales líneas de actuación, tanto intraeclesial como en la cooperación con el Estado; entre otras, creación de escuelas y talleres de restauración, acciones coordinadas con las órdenes religiosas, atención al patrimonio ubicado en ámbitos rurales, inscripción y registro de los bienes, publicación de inventarios, catálogos y guías.

Las IV Jornadas Nacionales de patrimonio cultural de la Iglesia, celebradas en 1984, analizaron el proyecto de ley del Patrimonio Histórico Español que se publicaría al año siguiente.

b) Ley 16/85 del Patrimonio Histórico español

La ley orientó sus preceptos a la regulación completa y global del patrimonio histórico español, con independencia de la concreta titularidad de los bienes que lo integran, por lo que no incluyó casi ningún precepto diferenciado respecto del patrimonio eclesiástico,

en contra de los criterios de la norma precedente, la Ley de 13 de mayo de 1933, donde las continuas referencias al patrimonio eclesiástico conformaban un verdadero régimen legal especial.

A juicio de Motilla, el criterio seguido por la nueva ley suponía un *«fiel reflejo de la voluntad del legislador de lograr un sistema unitario que garantice una misma disciplina, dando preeminencia a la función tuitiva sobre la tipología de los objetos, destinos o titulares de los mismos.»*⁹²

La ley tampoco hacía ninguna mención expresa a las obligaciones derivadas de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, aunque en la disposición adicional séptima se reconocía la sumisión de la norma a los acuerdos internacionales válidamente celebrados por España.

Esta normativa general que no estableció regímenes singulares planteó de nuevo, como cita Aldanondo, la necesidad de concreción de muchos de sus preceptos en su aplicación a fin de equilibrar *«el interés cultural, especialmente, en materia de autorización de obras por razones litúrgicas en monumentos declarados de interés cultural, visita pública en lugares en que se celebran actos religiosos, préstamo de bienes que posean un alto significado religioso, etc»*⁹³ con la preservación del valor del culto y la función litúrgica del arte eclesiástico al que el Estado está obligado en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede.

Solo en **dos momentos** el articulado de la ley se pronunció en forma expresa sobre los bienes eclesiásticos y ello con intención de **introducir fuertes restricciones** a su tráfico frente al régimen general establecido para otros titulares.

La primera reserva aparece en el artículo 28.1 dentro del Título III que dedica a los bienes muebles cuando establece que: *«los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario general que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de derecho público o a otras instituciones eclesiásticas.»*

⁹² MOTILLA DE LA CALLE, A., *Régimen jurídico de los bienes histórico-artísticos de la Iglesia católica*, Madrid, Eurolex, 1995, pág.263.

⁹³ ALDANONDO SALAVERRÍA, I., op. cit., pág.164.

La disposición transitoria 5ª aclaró que en los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 se entendería referido a los bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español en posesión de las instituciones eclesiásticas, es decir, se extendía la restricción a un grupo más amplio que el de los declarados de interés cultural y de los incluidos en el inventario general. El plazo se ha prorrogado por sucesivas disposiciones; por siete años más conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 4/2004 y por un año más a partir del 1 de enero de 2013 conforme establece la disposición adicional octava de la Ley 17/2012. Por lo que, en relación con el artículo 26 de la ley que establece que la administración del Estado *«confeccionará el Inventario General de aquellos bienes muebles del patrimonio histórico español no declarados de interés cultural que tengan singular relevancia»* se entiende que, transcurridos los plazos, la restricción de las transmisiones del artículo 28 se extiende a todos los bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español en posesión de instituciones eclesiásticas, hayan sido o no declarados de interés cultural o incluidos en el Inventario general de bienes muebles.

Este artículo 28.1 choca con el régimen canónico de licencias antes explicado y recibido en el ordenamiento civil a la luz del Acuerdo sobre asuntos jurídicos que reconocía plena personalidad jurídica a la Iglesia.

A juicio de algunos autores, se le limita fuertemente sus facultades de disposición de bienes muebles culturales al restringir el ámbito de los posibles adquirentes. La restricción, además, afecta sólo a los bienes de la Iglesia y no a bienes similares en poder de particulares por lo que cabría pensar en una violación del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución de 1978. La mayor parte de la doctrina considera que la voluntad del legislador ha sido la de sacar estos bienes del tráfico comercial privado y obligar a su permanencia en manos públicas o de otras entidades eclesiásticas para evitar su dispersión y garantizar su adecuada conservación así como asegurar el cumplimiento del mandato constitucional del acceso de la colectividad a la cultura.

Sin embargo, hay opiniones contrarias para las que la aplicación del régimen de tutela general a los bienes culturales en posesión de la Iglesia es congruente con la obligación de los poderes públicos de garantizar la conservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural del artículo 46 de la Constitución de 1978 y con el reconocimiento de la libertad de conciencia del artículo 16 y de la igualdad de los artículos 9 y 14 del mismo texto.

Tejón Sánchez⁹⁴ opina que la limitación no es contraria a los Acuerdos porque en ellos sólo se establece la obligación del Estado de colaborar con la Iglesia para conservar, proteger y hacer accesibles a la sociedad sus bienes culturales, aceptando después en el Documento de la Comisión Mixta Iglesia-Estado que la legislación estatal, en desarrollo del artículo 46 de la Constitución, pueda limitar derechos o facultades de la Iglesia.

La autora considera que la limitación no es tampoco discriminatoria frente a los particulares porque las características específicas de estos bienes justifican una diferencia de trato. De hecho, la limitación no se basa en el titular dominical pues afecta a todos sean estos titulares particulares o la propia Iglesia sino en el hecho de tratarse de una posesión de bienes culturales muy singular frente a la posesión común caracterizada por la dificultad de tutela y control sobre los mismos al encontrarse en manos de una organización propia y dispersa. Un ejemplo claro de esa necesidad de control apareció con la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II que, como hemos citado anteriormente, reformó la liturgia y dejó sin uso religioso muchos objetos con valor cultural de los que fácilmente, por sus características y despojados ya de valor de culto, se podía deshacer la Iglesia sin ninguna noticia del Estado sobre su tráfico.

En conclusión, el artículo 28.1 sólo limitaría las facultades de disposición cuando el título de la Iglesia sobre el bien fuera de propiedad.

La segunda restricción específica aplicable a los bienes eclesiásticos la encontramos en el artículo 49 del Capítulo Primero sobre el patrimonio documental y bibliográfico del Título VII. El criterio general de antigüedad superior a 100 años, con independencia del titular, asignado a todos los documentos⁹⁵ del citado patrimonio se reduce a superior a 40 cuando se trata de documentos *«generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado.»* Y además, el punto 5 del artículo hace desaparecer el criterio de

⁹⁴ TEJÓN SÁNCHEZ, R., “Los bienes culturales de interés religioso en la Ley de Patrimonio cultural de Castilla y León”, *Revista Patrimonio Cultural y Derecho*, nº9, 2005, pág.189.

⁹⁵ La ley entiende por documento *«toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones.»*

antigüedad alguna si se trata de documentos que merezcan la consideración de ser declarados constitutivos del patrimonio documental por la Administración del Estado.⁹⁶

En conclusión, sorprende que la ley haya sido sensible a las circunstancias singulares del patrimonio mueble y documental eclesiástico y haya sin embargo obviado las características, también singulares, e incluso más singulares, que concurren en el patrimonio cultural inmueble en propiedad o posesión de la Iglesia pues éste, además de constituir casi un tercio de los edificios catalogados de la nación, cumple el cometido constitucional de permitir la libertad de culto y sin embargo, su régimen de uso, derribo, visitas, reformas, enajenaciones y demás actuaciones vinculadas a las facultades dominicales sobre el edificio son, en la óptica de la ley, los mismos a todos los efectos que el del resto de inmuebles del patrimonio.

c) Las disfunciones

No creemos que se pueda cerrar un análisis de este marco jurídico sin mencionar una polémica de reciente planteamiento que manifiesta las notables disfunciones en el esquema legal y contamina de tensiones extremas el debate sobre la legitimidad de ciertas adquisiciones de inmuebles, muchos de ellos catalogados, por parte de la Iglesia y dedicados al culto religioso católico.

La incapacidad de la norma legal de proporcionar respuestas ágiles a nuevas situaciones contextuales permite la enquistada persistencia de reglas y prescripciones asentadas en un momento procesal anterior a las prácticas sociales contemporáneas y permite que el marco jurídico recoja escenarios previos aislados a los que objetiviza conforme a una realidad moral ya superada. J.H. Von Kirchmann enunció magistralmente este arduo debate del Derecho que nunca puede alcanzar la actualidad y llega siempre tarde a registrar la mutabilidad de su objeto en la evolución progresiva de los contextos vitales. Además, y en su opinión, *«es propio de toda ciencia el que su verdad llegue a sazón paulatinamente»* descubriendo leyes que sean ciertas en el presente, que lo fueran en el pasado y que lo sean para siempre⁹⁷.

⁹⁶ Este número 5 del artículo 49 fue declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991 de 31 enero *«si se interpreta en el sentido y alcance fijado en su Fundamento de Derecho 11»* de la sentencia. Los gobiernos de Cataluña, Galicia y País Vasco presentaron recursos de inconstitucionalidad de la ley por violación del artículo 149 de la Constitución de 1978 que fueron resueltos por esta sentencia.

⁹⁷ VON KIRCHMANN, J.H., *La jurisprudencia no es ciencia*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983, pág.14.

Algo que nunca ocurrirá en el enfoque legal del debate entre el culto y la cultura pues la ciencia jurídica montará en cada circunstancia su rígida malla según la confesionalidad del Estado, la trascendencia política que ese Estado conceda a la religión, el respeto que otorgue a los derechos del individuo y a la identidad de las creencias, el grado de intervención que los poderes públicos se adjudiquen en la defensa y promoción de la cultura, el arraigo e influencia que el culto tenga en la sociedad y la amplitud de prácticas humanas compartidas que existan en el tejido social; conceptos todos en dinámica transformación permanente de su propio significado y de sus conexiones y que condenan a esa inestabilidad y diacronía legal que denuncia Von Kirchmann.

Hemos visto como ese espíritu de reconocimiento privilegiado hacia la Iglesia que impregnaba los Acuerdos de 1979, con una Constitución aún muy reciente, desaparece por completo, sólo seis años después, del texto de la Ley del Patrimonio de 1985 cuyas escasísimas referencias hacia los bienes culturales de la Iglesia son, como hemos comentado, para imponerles un trato específico más desfavorable y restrictivo que al resto por el mero hecho de ser bienes eclesiásticos.

Pero la perplejidad salta con el Real Decreto 1867 de 1998 que nace para paliar la acuciante necesidad de modificar la mayor parte de los artículos del desfasado Reglamento Hipotecario de 16 de abril de 1947 y olvida actualizar los artículos 303 y 304. Éstos permanecen, veinte años después de la Constitución de 1978, en su antigua redacción que desarrollaba el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 y equiparaba en definitiva al eclesiástico con un fedatario público a efectos muy importantes relacionados con el dominio de bienes inmuebles.

Se crea así una situación normativa cuando menos paradójica pues, en el seno de un Estado que declara su aconfesionalidad y en el que la práctica de la religión católica ha desaparecido de la costumbre general, continúan en vigor, en una codificación sectorial tan trascendente como la que regula la propiedad, reminiscencias legales basadas en la confusión entre realidad social, institucional y eclesial existente en tiempos pasados y contrarias a la moderna declaración constitucional de laicidad estatal, igualdad religiosa y neutralidad.

En efecto, el citado artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 atribuía a la Iglesia Católica respecto a los bienes inmuebles inmatriculados en su posesión una potestad extraordinaria, permitiéndole inscribirlos a su nombre *«cuando carezcan del título*

escrito de dominio» con sólo emitir los obispos un certificado de propiedad, a pesar de no disponer de otros documentos que probaran tal titularidad.⁹⁸ La anotación estaba exenta de publicidad por edictos y esta ausencia de difusión facilitaba que transcurrieran, sin que nadie lo advirtiera, los dos años de carencia de los que goza toda primera inscripción para ser recurrible.

Se trataba de bienes que no eran técnicamente de nadie, ya que en muchos casos su antigüedad era mayor a la del propio Registro de la Propiedad y, por lo tanto, no estaban inscritos, pero se presumía una fiabilidad declarativa especial sobre su demanialidad por estar en posesión de las entidades públicas territoriales o de la Iglesia católica.

Durante los tres meses que el Tribunal Constitucional otorgó en 1979 para proponer los conflictos constitucionales de leyes anteriores a su creación, no se produjo impugnación alguna de la citada norma y la singular técnica de adquisición permaneció dormida pero latente hasta que dos reformas de la antigua Ley de 1946 ampliaron aún más las citadas facultades extraordinarias de la Iglesia.

La primera se produce con el artículo 144 de la Ley 13 de 1996 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social que extiende la extraordinaria vía del artículo 206 a múltiples actos sobre las fincas urbanas⁹⁹; la segunda, con el Real Decreto 1867 de 4 de septiembre de 1998 que modifica entre otros la redacción del artículo 4 de la Ley

⁹⁸ Artículo 206, Ley Hipotecaria de 1946: «*El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos.*»

⁹⁹ Artículo 206, Ley 13 de 1996: «*El Estado, la provincia, el municipio y las Corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a: cuyo cargo esté la administración de los mismos en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes.*»

Hipotecaria y permite el acceso al registro de los edificios eclesiásticos que tenían vedada la inscripción en la legislación hipotecaria anterior.¹⁰⁰

Insistimos en que todo esto ocurre dieciséis y dieciocho años después de la entrada en vigor de la Constitución y, además, sin mención alguna a excepción, once años después de la entrada en vigor de la Ley del Patrimonio histórico, a los inmuebles eclesiásticos catalogados y que formaban ya parte del citado patrimonio.

El Real Decreto de 1998 silencia el asunto y desde entonces, a través de esa vía excepcional, la Iglesia ha inscrito a su nombre el dominio de muchos edificios provocándose una fuerte alarma social.

El Consejo General del Notariado ha señalado que *«la inmatriculación, el acto del primer registro de una finca, de una propiedad a través de un notario es un proceso complejo, que exige certificaciones y testigos y que, en este caso, es obviado por una certificación del obispo.»*

Aunque la nueva reforma de la Ley hipotecaria aprobada por Ley 13/2015 de 24 de junio suprime esta descontextualizada posibilidad de inscripción registral de inmuebles no se define sobre la inconstitucionalidad anterior de su práctica, por lo que, según algunos, supone una cierta amnistía registral de las adjudicaciones previas a la norma. Las actuaciones consumadas deberán ser reclamadas una a una y demostrando en cada caso un mejor derecho de tercero.¹⁰¹

¹⁰⁰ Artículo 1, RD 1868/98: *«Nueva redacción del artículo 4 de la Ley Hipotecaria de 1946: Serán inscribibles los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, sin distinción de la persona física o jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los de las Administraciones públicas y los de las entidades civiles o eclesiásticas.»*

¹⁰¹ La única alegación de la inconstitucionalidad del artículo 206 y de sus reformas aparece en la Sentencia nº 6845 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en un litigio entre un Ayuntamiento y la Iglesia católica por una ermita enclavada en terrenos municipales inscritos en 1944 con anterioridad a la inscripción eclesiástica de 1996 y por el que la Corporación pública había ejercido la acción reivindicatoria. En su Fundamento de Derecho Tercero, pág.4, expone: *«No se estima inconstitucional este precepto ni procede plantear la cuestión de inconstitucionalidad, porque el Ayuntamiento demandante, recurrente en casación, no puede alegar discriminación ni atentado al principio de igualdad, siendo así que también el mismo goza de idéntica atribución, ni puede como tal mantener el principio de igualdad respecto a otras Iglesias, ni, por último, puede obviarse que el párrafo segundo de aquella norma ha sido introducido por el artículo 144 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, sin que se haya cuestionado nunca la posible inconstitucionalidad de todo el precepto. Por otra parte, la alegada inconstitucionalidad tampoco afectaría a una situación jurídica ya consolidada, ya que en el presente caso la inscripción se ha producido tiempo ha.»*

A nuestro juicio, la incertidumbre afecta al fondo y a la forma del método más que al resultado pues la Iglesia habría podido probar sin dificultad una posesión inmemorial, continuada e ininterrumpida de muchos de esos inmuebles a título de dueño como justo título de usucapión adquisitiva.

Respecto a la forma, es indiscutiblemente anacrónico continuar con la práctica de investir de capacidades extraordinarias civiles, procedimentales y constitutivas, a quien, en la sociedad actual, no tiene razón alguna para ostentarlas.

Y en lo que atañe al fondo, no se debía haber ignorado que muchos inmuebles en posesión de la Iglesia se habían mantenido e incluso erigido a través de aportaciones particulares de los vecinos o del trabajo comunitario ni que muchos otros eran portadores de un importante valor cultural al que el Estado debía haber prestado un poco más de atención en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 46 de la Constitución de 1978.¹⁰²

Porque en el caso de pueblos y aldeas en zonas aisladas, en particular del norte de España, los beneficios de bienes comunales se habían destinado durante siglos y siglos a la construcción o conservación de los templos cuando no era posible acometer tales empresas con las rentas destinadas al clero. Se trataba de asignaciones históricas sin retorno dado que, además de atender a necesidades espirituales, cumplían con servicios colectivos de cohesión social como cementerio, registro civil, alarma y arbitraje en lugares inaccesibles del territorio y lejanos de las urbes. Pero una vez que esas funciones, que otrora sólo atendió la Iglesia, pasaron a prestarse por el poder público en

¹⁰² Uno de los casos más mediáticos es el de la Mezquita de Córdoba, en cuyo mantenimiento y restauración tanto el gobierno regional como múltiples entidades privadas habían invertido cantidades ingentes de dinero, y que ha quedado, sin embargo, registrada como Santa Iglesia Catedral de Córdoba a nombre del Obispado el 2 de marzo de 2006.

La Iglesia apela a que Fernando III el Santo decidió en 1236 que la Mezquita *fuera consagrada y convertida* en Catedral.

La Dirección General de Patrimonio del Estado, en su escrito de 6 de mayo de 2014 de archivo de una denuncia particular, cita la misma referencia histórica y no considera que haya indicios de usurpación alguna del monumento por parte de la Iglesia, a pesar de que la consagración de un bien al culto religioso no sea ninguno de los modos de adquirir la propiedad que determina el Código Civil. En cualquier caso, no hace mención alguna al carácter monumental del edificio.

todos lados, algunos se cuestionan la titularidad exclusiva de la Iglesia sobre los inmuebles debido al origen civil de los fondos con los que se financiaron.¹⁰³

A su vez, sorprende la inhibición de la Administración en un proceso de reconocimiento del dominio de inmuebles ya catalogados por la Ley del Patrimonio de 1985; procedimiento en el que la Administración debería haberse reservado, al menos, la posibilidad de personarse pues se trataba de bienes portadores de valores reconocidos que les hacían acreedores de una especial consideración y protección por parte de los poderes públicos y en consecuencia sometidos en todo su devenir técnico y jurídico, con independencia de la cualificación de su titular o de su poseedor, al estatuto peculiar del Título V de la Ley de Patrimonio.

X.3. Aportaciones de la jurisprudencia

Traemos a colación cuatro sentencias que entendemos muy ilustrativas de la evolución del conflicto jurídico entre el culto y la cultura, tres en el ámbito jurisdiccional del Tribunal Supremo y una en el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y creemos esencial exponerlas por orden cronológico pues aclaran esa desmembración paulatina del culto católico de la cultura social y de la costumbre moral que origina el desencuentro humanístico y como corolario el jurídico.

La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 4316 de 30 de mayo de 1992 confirmó la titularidad de la Iglesia en un antiguo conflicto de demanialidad entre el Cabildo de la Catedral de Córdoba y los poseedores de un inmueble próximo a la misma donde se guardaban piezas arqueológicas bajo la rúbrica de Museo Mezquita Catedral lo que a juicio del ponente *«da una idea del destino artístico-cultural de la casa que servía de esta suerte al acervo histórico que es patrimonio de la sociedad.»*¹⁰⁴

¹⁰³ En Navarra, plataformas vecinales de pueblos de los valles como Nafarroa, Benegorri, Uxue, Tiebas o Mendigorria están realizando campañas para denunciar la reciente inscripción a nombre de la Diócesis de iglesias, ermitas y atrios construidos o restaurados con el producto de la explotación de bienes comunales. En Etxarri Aranatz los vecinos han sacado a la luz una noticia publicada por el «Diario de Navarra» el día 29 de setiembre de 1953 referente a la restauración de la parroquia de la Virgen del Rosario. Según el alcalde de aquella época, Primitivo Quintana, las obras habían costado tres años y 2,4 millones de pesetas, cantidad muy importante en aquellos tiempos. El propio alcalde informaba de que esa cantidad había salido de la explotación de los montes comunales y había sido invertida en otro bien comunal, como era la iglesia del pueblo.

¹⁰⁴ Fundamento de Derecho Cuarto.

Sin que se hubiera producido pago alguno al Cabildo por la expropiación del bien desamortizado, las Reales órdenes de 7 y 23 de abril de 1902 habían anulado la subasta que había tenido lugar en ejecución de la desamortización de las *manos muertas*, y la consecuente venta judicial del mismo a un particular por la utilidad que el inmueble prestaba como museo. Los demandantes, descendientes de antiguos sirvientes de la Catedral y que habían ocupado el inmueble en una posesión en precario meramente tolerada por el Cabildo, apelaban al reconocimiento de su dominio pero la Sala confirmó la propiedad de la Iglesia en base a que tales actos de tolerancia posesoria eran inaptos para más altas y profundas aspiraciones jurídicas, que el inmueble figuraba en el Inventario del Cabildo y que la Dirección General del Patrimonio del Estado había dispuesto en 1978 que no procedía la incorporación del inmueble de autos al Patrimonio del Estado.

En resumen, consideramos relevante para nuestro tema de estudio en esta sentencia pronunciada en 1992 la naturalidad con la que todavía se acepta que el fin cultural de un inmueble sea indicio de titularidad del mismo por la Iglesia así como que se considere probatorio de dominio el hecho de la simple inclusión del bien en un listado realizado sin confrontación alguna unido a un razonamiento deductivo sobre decimonónicas premisas por el que, manifestado el desinterés del Estado, corresponde la propiedad a la Iglesia.

Si nos trasladamos cuatro años más tarde en la jurisprudencia, la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 6456 de 18 de noviembre de 1996 opera ya en otro sentido al entender sobre un litigio de inscripción registral a nombre de la Iglesia, al amparo del controvertido artículo 206 de la Ley Hipotecaria y con el fundamento de la posesión inmemorial, de unas fincas en unos montes que previamente habían sido calificados vecinales en mano común. En las citadas fincas se encontraban situadas unas ermitas con capillas y cruceiros.

El tribunal aprovecha la ocasión casacional para manifestar su opinión sobre la vigencia del famoso artículo y considera que la formula arbitrada en el siglo XIX de certificación eclesiástica, no de dominio sino de posesión, expedida por el obispo para el acceso al registro de los bienes que quedaron en poder de la Iglesia tras ser excluidos de la venta forzosa impuesta por la Ley de Desamortización de 1 de mayo de 1855 y fórmula que

coincidía con la exigida para los bienes estatales, tiene difícil encaje con el artículo 3 de la misma Ley Hipotecaria *«dado que en la actualidad la Iglesia Católica no se encuentra en ningún sitio especial o de preferencia que justifique objetivamente su posición registral y tratamiento desigual respecto a las otras confesiones.»*¹⁰⁵

Se alegaba que la propiedad vecinal de las fincas obstaculizaba la inviolabilidad y el respeto de las ermitas y capillas a lo que el tribunal se opuso al considerar que el culto en esos edificios, respecto a los cuales confirmaba la jurisdicción de la Iglesia, era compatible con los derechos de otros sobre los terrenos respecto a los cuales la Iglesia no había acreditado ninguna prueba dominical excepto actuaciones eventuales y manifestaciones no consolidadas circunscritas a los lugares de culto que no se justificaban como útiles para declarar a su favor el dominio controvertido. La mera inmatriculación de los bienes litigiosos practicada por la vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, acudiendo a formar arbitrariamente enclaves y segregaciones carente de toda justificación, no debía haber prosperado por la existencia de una inscripción anterior a favor de los vecinos pues *«los vecinos tienen sus derechos y el solo hecho de ser vecinos no desmerece para ser titulares dominicales, máxime en el país gallego, donde los montes son algo que se siente como inherente a la galleguidad y obliga a su defensa y conservación.»*¹⁰⁶

El tercer momento en nuestro recorrido por el cambio de las mentalidades jurídicas se sitúa en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo nº 528 de 10 de febrero de 2009 en un litigio entre la Diócesis de Ávila y la Real Academia de la Historia a propósito de unas obras de remodelación del Presbiterio de la Capilla mayor de la Catedral. Las modificaciones, realizadas sobre un proyecto aprobado por la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, tapaban unas tumbas grabadas con inscripciones referentes a antiguos obispos de la Diócesis para poder colocar sobre ellas el altar conforme a las nuevas exigencias del Concilio Vaticano II para la liturgia católica.

La Sala rechazó todos los motivos de casación contra la sentencia nº 414 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla

¹⁰⁵ Fundamento de Derecho Segundo.

¹⁰⁶ Fundamento de Derecho Quinto.

León de 28 de enero de 2005 en la que se ordenaba al Cabildo al levantamiento de las obras realizadas cubriendo las laudas. La sentencia de la Sala de Instancia había sido de las primeras que se atrevía a plantear la posibilidad de tener que discernir entre el valor de culto y el valor cultural.

La Real Academia de la Historia consideraba que el patrimonio eclesiástico era una especie dentro del género más amplio del patrimonio histórico y, aunque con características propias derivadas de los actos litúrgicos a los que estaba destinado, no podía prevalecer sobre el derecho a la protección del patrimonio histórico de tal forma que, en caso de conflicto, este último era preferente. El Cabildo a su vez defendía su derecho primario al culto en el Presbiterio que había sido acomodado con las obras efectuadas a fines exclusivamente litúrgicos, sin que cupieran otros incompatibles con dicho fin.

La sentencia recogió las posiciones enfrentadas y planteó que *«sería cuestión de estudiar si es más importante proteger el derecho de los ciudadanos a contemplar este monumento funerario o el derecho a realizar la función social religiosa de la Catedral»*¹⁰⁷ aunque a su juicio la preservación del fin social de la liturgia no podía suponer eliminar otros valores. Consideró, sin embargo, inane el debate en el asunto de autos pues existían soluciones técnicas que permitían compaginar ambos intereses.

La Sala del Tribunal Supremo confirmó todos los extremos de la sentencia anterior y en su resolución añadió interesantes comentarios sobre el conflicto considerando que la elección entre el derecho de los ciudadanos a contemplar el monumento funerario o el derecho a realizar la función religiosa de la Catedral *«solo sería exigible cuando estuviera acreditada la absoluta incompatibilidad entre uno y otro uso»*, incompatibilidad que no aparecía en el asunto planteado aunque de haber existido y haber tenido que escoger entre uno y otro *«en este caso sería ciertamente el litúrgico o religioso.»*¹⁰⁸ Las laudas fueron finalmente desenterradas y el altar se adelantó para no entorpecer la contemplación.

Saltando de instancia y en el tiempo a un momento muy reciente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 4 de noviembre de 2014 ha fallado a favor de

¹⁰⁷ Fundamento de Derecho Quinto.

¹⁰⁸ Fundamento de Derecho Cuarto.

un particular que denunció ante la Corte de Estrasburgo la violación por el Estado español de los artículos 6.1 del Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 donde se establece el derecho a un proceso equitativo y público por un Tribunal independiente e imparcial y 1 del Protocolo adicional por el que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley; todo ello a propósito de un proceso en la jurisdicción nacional que confirmó la inscripción por la vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria de una ermita cisterciense a nombre de la Iglesia frente a la del particular que figuraba inscrito con anterioridad en el registro como titular de la misma.

El litigio en cuestión se remonta de nuevo a las leyes de desamortización por las que en 1853 se vendieron los terrenos que pertenecían a un monasterio, con descripción de los inmuebles incluidos en el lote y entre ellos una iglesia, los cuales, en transmisiones ulteriores, llegaron al actual propietario quien había procedido a la compra y subsiguiente inscripción en el registro de los terrenos y los edificios en 1979. A pesar de ello, en 1994 se registró una segunda inscripción de la ermita a favor de la Diócesis con base en el certificado de posesión inmemorial de la misma que había expedido el Obispo, provocándose así una doble inscripción del mismo bien.

Se inició un proceso en la jurisdicción nacional en el que el particular afectado apeló a la inconstitucionalidad del artículo hipotecario, a la expropiación de su propiedad privada sin causa de utilidad pública ni indemnización y a la discriminación legal favorable a la Iglesia católica respecto a los particulares y a las otras confesiones.

La Diócesis mantuvo en todo momento que la ermita estaba excluida de la inicial venta ya que el artículo 6 de la ley desamortizadora de 2 de septiembre de 1841 exceptuaba de sus efectos a las iglesias y a las catedrales; esta postura fue confirmada por la Audiencia Provincial de Palencia de 5 de febrero de 2001 quien consideró la mención de la ermita un error material de la inscripción registral preexistente pues la iglesia había continuado con sus funciones parroquiales hasta 1981, momento en el que cesaron sus actividades por carencia de feligreses. Siendo pues de aplicación el Derecho canónico no cabía posibilidad de usucapión a favor de un particular, además de que el hecho de que éste dispusiera de las llaves de acceso a la misma no era tampoco presunción posesoria alguna.

En todas las instancias nacionales de apelación la pretensión del particular fue rechazada e incluso se le negó la posibilidad de casación pues al ser incalculable

económicamente el valor de la ermita medieval por sus características históricas y artísticas, inestimable a juicio de los peritos, impedía al tribunal comprobar si cumplía el requisito del valor mínimo exigido para recurrir a tal instancia.

La Corte Europea admitió, sin embargo, la petición y consideró que se habían vulnerado los derechos del particular a todo lo largo del proceso.

A nuestro juicio, creemos que lo más interesante de la decisión es analizar los argumentos con los que la Administración justifica *in extremis* la vigencia en una sociedad laica del controvertido artículo 206 a través de unos argumentos que según la Corte europea solo pretenden despistar de la vulneración de derechos fundamentales provocados con la sentencia.

Así, se alegó que el efecto único de la inmatriculación era crear una presunción posesoria que podía cesar frente a una prueba contraria en un proceso judicial por lo que nunca podría ser equiparada a una expropiación; en el proceso, se había determinado una mejor posesión de la ermita por la Iglesia y esa posesión había sido juzgada en condiciones de igualdad. La admisión de la certificación posesoria como medio de inscripción derivaba de la dificultad de determinar el origen dominical poseídos desde tiempo inmemorial y para los que no existía título justificativo de propiedad. No eran razones de privilegios específicos para la Iglesia católica sino de reconocimiento de situaciones históricas, creadas tras la desamortización del s XIX, y con el objetivo de favorecer el interés público y la publicidad registral; se le concedían a la Iglesia en condiciones de igualdad con otros estamentos públicos en las mismas circunstancias de precaria demanialidad, si bien en el caso de autos y conforme al Derecho canónico que era el de aplicación, el certificado debía estar expedido por el Obispo.

Así, mientras que el discurso de la Administración se centraba en cuestiones periféricas del asunto tales como la negación de usucapión o expropiación, el particular apelaba a la Corte europea apelando a la trascendencia social, económica y jurídica de su futura decisión. Y en ella, como hemos anunciado, el Tribunal Europeo confirmó la violación de derechos del particular y se manifestó muy sorprendido porque no se hubiera valorado en las instancias nacionales ni la doble inmatriculación que niega la propia Ley Hipotecaria ni la mención exclusiva de la Iglesia católica frente a otras confesiones ni la ausencia, en contra de la seguridad jurídica, de limitación temporal y de publicidad de tales inscripciones eclesiásticas.

Esta sentencia europea nos permite concluir el análisis jurídico con una reflexión. La jurisprudencia, quien disfruta en su interpretación de mecanismos que le otorgan frente

al precepto legal una óptica más viva y atenta de la realidad presente, avanza en la determinación de posiciones jurídicas separadas del culto y de la cultura con el límite muy nítido de los derechos fundamentales de la persona y saneadas ambas posturas de vestigios antiguos en los que todavía resuenan papeles preponderantes y facultades omnímodas.

III. Conclusión

El culto religioso y la cultura se enfrentan a un conflicto de doble vertiente humanística y jurídica pues cuando se plantea la cuestión social sobre el uso, el mantenimiento y la conservación de los inmuebles catalogados en el elenco del patrimonio histórico y artístico de la nación en posesión de la Iglesia católica se concluye en un debate sobre la titularidad y las facultades dominicales sobre los mismos.

El famoso aforismo atribuido a Goethe: *«quien tiene ciencia y arte, ese también tiene religión; quien no posee estas dos, que tenga religión»* sintetiza sin complejos la condición del culto católico que fue el principal impulsor del arte en la historia de Europa durante un largo periodo de tiempo; la magnificencia artística y técnica de los arbotantes y vidrieras góticas, las proporciones precisas de los claustros góticos, las complejas bóvedas y arquerías de tantas iglesias y ermitas hicieron de muchos edificios eclesiásticos contenedores físicos de dos valores inmateriales, el religioso y el artístico. Unidos en conmixión, ambos valores se mantuvieron confundidos y compenetrados a lo largo de muchas décadas hasta que la sociedad apartó de sus costumbres globales la práctica de la religión tras siglos y siglos de pervivencia, la redujo a la esfera personal del individuo, restringió el componente cultural al aspecto identitario del culto y reclamó para sí el legado histórico y artístico.

Desatado el conflicto, creemos, sin embargo, que debe encontrarse un ámbito común de entendimiento que integre visiones contemporáneas de los valores del edificio sin desfigurar las que tradicionalmente había tenido, argumento que resume la ya citada Carta de Venecia de forma contundente con muy breves palabras en su artículo 7: *«el monumento es inseparable de la historia de la que es testigo y del lugar en el que está ubicado.»*

Y proponemos como conclusión de todo el análisis realizado en este estudio que la construcción de ese ámbito común se articule sobre dos axiomas que, como tales, sean aceptados como punto de partida de cualquier fórmula jurídica y social de resolución.

Nos referimos a los siguientes:

- el edificio religioso, histórico y artístico acarrea un derecho primigenio que obliga al respeto de la integridad de su núcleo básico, tanto al ejercitar el derecho de culto como el de la cultura. La ficción jurídica de considerar titular de derecho a un complejo inerte no nos parece insalvable si se le atribuye al edificio la representación legal en el momento actual de las generaciones anteriores que lo construyeron, lo utilizaron y lo llenaron de significado o si se le considera personificación moral reunión de todos los antecedentes o si, simplemente, se le interpreta como patrimonio impersonal cuyo titular es un fin testimonial que le dota de garantías jurídicas.

Ese contenido medular inviolable y determinable sin parciales contaminaciones de veleidades históricas, sociales y políticas vendría definido por lo que hemos llamado su valor neutro.

Un primer análisis minucioso del valor neutro del edificio eclesiástico catalogado estipularía en cada caso los valores culturales compatibles, que quizá no pudieran ser todos los al uso de una sociedad, y el valor de culto asumible, que quizá tampoco pudiera ser todo el que reclamara en un determinado momento el rito.

Cualquier nueva función introducida tendría que ser coherente con el carácter, vocación y estructura del edificio, cuestiones las tres perennes en su definición, so pena de brutales transformaciones, en el pasado, en el presente y en el futuro.

La Carta de Quebec de 2008 del ICOMOS utilizó el acertado término de *espíritu del lugar* para designar esa interacción mutua y referencial entre el conjunto de elementos materiales e inmateriales «*que otorgan significado, valor, emoción y misterio al lugar.*»¹⁰⁹ Un edificio que nació con espíritu sacro sometió a ese designio sus proporciones, sus materiales, sus recorridos, la voluntad del arquitecto, la financiación de los mecenas y la participación de los operarios; esa reunión de propósitos hizo del edificio arte y el trascurso del tiempo las convirtió en históricas.

Aunque bien es cierto que cada generación aportaría una respuesta diferente sobre el significado de ese espíritu sacro, el común origen etimológico del culto y de la cultura en tanto cultivo del espíritu permitiría definir, al menos por vía negativa, una matriz de usos culturales y de usos religiosos que, como *utilitas* de un espacio, compartieran el uso sacro latente en la *firmitas* y la *venustas* del edificio.

¹⁰⁹ ICOMOS, *Declaración sobre la preservación del espíritu del lugar*, aprobada en Quebec el 4 de octubre de 2008, pág.2.

Y de esta manera, no cabría un uso ni una función cultural soez, irrespetuosa, irreverente, grosera hacia ese espíritu sacro¹¹⁰ ni tampoco un uso o una función religiosa que trivializara, modificara o trasfigurara su estética artística. En definitiva, un equilibrio intencional que no violentara ninguno de los elementos que configuraron, en la forma y en el fondo, la entidad tectónica histórica y artística.

Por otro lado, el ejercicio de las nuevas funciones introducidas no podría suponer un abuso del derecho al culto ni del derecho a la cultura; la doctrina jurídica tacha de abusivo al ejercicio de un derecho contrario a la buena fe, desviado de los fines de su reconocimiento o encaminado a dañar o perjudicar a un tercero. Y la citada Ley del Patrimonio Histórico de 1985 considera causa de interés social para la expropiación del inmueble en su artículo 37.3 *«un uso incompatible con sus valores»*, además del peligro de destrucción o deterioro que el ejercicio de cualquier derecho pudiera causar al edificio.¹¹¹

- la arquitectura se distingue de todas las demás artes en su ser inmueble eternamente necesario por lo que aporta mucho más que la mera emoción estética. Sólo de ella se puede decir que es el *«arte en el que vivimos»* y el *«arte que se usa y se estropea»* como afirmó Robert Hughes¹¹² y, a diferencia de un cáliz, un códice, un lienzo o una imagen, un edificio no puede confinarse en la vitrina de un museo por su valor artístico o histórico cuando se deja de utilizar. Se atribuye al arquitecto Tadao Ando un bonito enunciado: *«la arquitectura sólo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta.»*

Asumida pues la obligación de mantenerlo en uso y evitar su destrucción, la ineludible conservación debe sustentarse más allá de la mera redefinición de usos y basarse en su viabilidad estructural, técnica y económica y en su capacidad de fomentar el desarrollo del territorio que lo circunda y donde se inserta. Sólo incorporando en el análisis

¹¹⁰ El canon 1222.1 permite desacralizar las iglesias y destinarlas a un uso profano no sórdido.

¹¹¹ Un uso que, aunque suponga el ejercicio del derecho de acceso a la cultura, introduce un riesgo importante para los edificios eclesiásticos catalogados es el del turismo masivo; dado que la entrada a muchos de estos inmuebles debe ser libre y gratuita como es el caso de las iglesias durante las celebraciones sagradas según el canon 1221, la afluencia descontrolada de turistas puede provocar importantes interferencias y perturbaciones en el uso litúrgico del edificio y en su conservación en tanto entidad histórica y artística en sí o entidad cultural al servicio de otros usos como el didáctico o el de investigación.

¹¹² HUGHES, R., “Problemas en Utopía”, Documental nº4 de la serie *El impacto de lo nuevo* para la BBC2, 1979.

parámetros implicados en el proceso orgánico de evolución social más ambiciosos que su pasiva contemplación y el uso por una comunidad reducida, se justifican las ingentes inversiones y la costosa carga financiera que el mantenimiento de tales edificios genera.¹¹³

El ICOMOS ha desarrollado varios documentos resaltando la importancia de la gestión coordinada del patrimonio con el entorno; en su XV Asamblea General en Xian en 2005 afirmó que los edificios históricos y artísticos recibían su significado y su carácter distintivo *«de la percepción de sus valores y de sus relaciones significativas con su medio cultural, físico, visual y espiritual»* y en la XVII Asamblea General en La Valetta de 2011, identificó una serie de estrategias para integrar el patrimonio histórico y artístico como recurso constitutivo del ecosistema urbano y potenciar su capacidad de impulsar un desarrollo armonioso del contexto territorial.

Junto a la consideración de estos dos axiomas, queremos sugerir dos medios que, paralelos en el tiempo y complementarios en el resultado, ayudarían a lubricar los conflictos de uso y disposición de los inmuebles eclesiásticos histórico artísticos; como apunta Jhon Dos Passos en una insinuante frase: *«Los medios son más importantes que los fines porque los medios modelan instituciones que establecen maneras de conducta, mientras los fines no se alcanzan nunca en la vida de un hombre.»*

El primer medio consistiría en desarrollar un marco jurídico con la perspectiva del valor neutro y del valor de sostenibilidad de los inmuebles culturales, bien a través de la propuesta mayúscula de una normativa propia para la arquitectura que incluyera a la catalogada, cuestión que ya hemos defendido en otros foros y en la que volvemos a insistir pues la trascendencia social de la arquitectura justifica un tratamiento propio en todos los ámbitos que en nada se asemeja al del patrimonio mueble, o a través de recursos más modestos pero de clara interpretación legal tales como cláusulas específicas y excepciones del régimen general del resto de bienes culturales.

El segundo medio exigiría una previa conversión de las partes implicadas por la que la Iglesia, el Estado y los representantes sociales hicieran dejación de su óptica exclusiva en el seno de un enfoque amplio e integrador del culto y de la cultura en torno al aspecto activo del edificio como agente de bienestar religioso y laico y a su aspecto pasivo de

¹¹³ La Carta del ICOMOS de 2003 en su punto 1.6 recomienda que, dada la peculiaridad de la arquitectura, cualquier análisis sobre la conservación y restauración de un monumento debería seguir las fases sucesivas que utiliza la medicina: anamnesis, diagnosis, terapia y control. En definitiva, tratarlo como un organismo vivo con una entidad propia desde su nacimiento.

testimonio de civilización. Una posterior colaboración fecunda y recíproca que resaltara estos valores, los incorporara a la enseñanza y a la formación en la escuela, los respetara, los mostrara y los divulgara sin lesionar sensibilidades, al margen de posiciones ideológicas y con una aproximación abierta hacia la conciencia de las generaciones futuras quienes quizá quisieran ampliar el contenido del culto y de la cultura a otros conceptos distintos de los actuales.

La elusión en el diálogo y en la medida de lo posible del litigioso término de patrimonio y sus derivadas connotaciones jurídicas hacia la titularidad y las facultades dominicales así como la incorporación al intercambio de ideas de la iniciativa ciudadana y la participación de la comunidad ayudaría de forma notable a la propagación de un sentimiento aséptico de mera tenencia de esos bienes como testimonio de conexión generacional y de cohesión social en torno a un todo, que es para todos, de todos y con todos.

No queremos concluir sin citar algunas actuaciones concordadas en marcha que, con notable éxito, se encauzan en las vías de solución que hemos aportado en este estudio. Con el *Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Iglesia católica para el Plan nacional de catedrales*, de 25 de febrero de 1997 una comisión delegada del Consejo del Patrimonio Histórico con la participación de entes locales y responsables eclesiásticos ha elaborado un documento conjunto que, sobre las ideas rectoras de afirmación del interés mutuo en la conservación del patrimonio catedralicio, de integración indisociable en los inmuebles de todo su contenido mueble, de reconocimiento tanto de su función primordial de culto y uso religioso como de puesta a disposición de las catedrales al servicio de la comunidad, establece la necesidad de elaborar planes directores con los criterios técnicos y financieros para el mantenimiento y conservación en uso en una acción conjunta de todos los implicados. En el plan figuran 90 catedrales, en muchas de las cuales se han realizado ya importantes trabajos de conservación. Por su parte, el *Acuerdo de colaboración, entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Iglesia católica para el Plan nacional de abadías, monasterios y conventos*, de 25 de marzo de 2004 dio lugar a un documento inicial articulado en torno a los aspectos jurídicos, valores patrimoniales, metodología de actuaciones y usos compatibles en tales edificios.

Bibliografía

- ALDANONDO SALAVERRÍA, I. (2006). “El patrimonio cultural de las confesiones religiosas”, *Revista catalana de Derecho Público*, núm. 33.
- ALONSO IBÁÑEZ, R. (1992). *El Patrimonio Histórico. Destino público y valor cultural*, Madrid, Civitas-Universidad de Oviedo.
- ÁLVAREZ ÁLVAREZ, J.L. (1986). *Patrimonio histórico artístico de la Iglesia en el ordenamiento europeo*, Madrid, Universidad de Comillas.
- AROCA HERNÁNDEZ-ROS, R. (2014). *Edificios mágicos*, Madrid, Espasa Libros.
- ARROYO YANES, L.M. (2006). “Los derechos culturales como derechos en desarrollo: una aproximación”, *Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas, Nuevas políticas públicas*, núm. 2.
- BALAGUER CALLEJÓN, F. (2004). *Derecho constitucional y cultura. Estudios en homenaje a Peter Haberle*, Madrid, Editorial Tecnos.
- BARICCO, A. (2008). *Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación*, Barcelona, Editorial Anagrama S.A.
- BARTHES, R. (1976). “Rhétorique de l’image”, *Communications*, núm. 4.
- BRANDI, C. (2010). *Viaje a la Grecia antigua*, Barcelona, Editorial Elba.
- CAMPO BAEZA, A. (2012). *Principia Architectonica*, Research Papers, Columbia University, Mairera Libros.
- CARRASCO TERRIZA, M. (2012). “Exvoto”, *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Pamplona, Aranzadi, Instituto Martín de Azpilicueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra.
- CHARTIER, R. (2005). *El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII*, Barcelona, Editorial Gedisa.
- CHOAY, F. (2007). *Alegoría del Patrimonio*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
- DE PAOLIS, V. (2012). *Los bienes temporales de la Iglesia*, Madrid, Biblioteca de autores cristianos, Universidad San Dámaso.
- DÍAZ DE RADA, A. (2010). *Cultura, antropología y otras tonterías*, Madrid, Editorial Trotta.
- DIMAGGIO, P. (2013). “La influencia de internet en la producción y el consumo de cultura. Destrucción creativa y nuevas oportunidades”, *C@MBIO*, BBVA.
- DU CAMP, M. (1882). “Revue des deux mondes. Cap. VIII: La Grèce”, *Souvenirs littéraires, Revue de Paris*.

FERNÁNDEZ LIESA, C. y OLIVA MARTÍNEZ, D. (2010). “La cultura en el Derecho Internacional contemporáneo”, *Revista de Patrimonio cultural y Derecho*, núm. 14.

FERNANDEZ LIESA, C. y PRIETO DE PEDRO, J. (2009). *La protección jurídica internacional del patrimonio cultural. Especial referencia a España*, Madrid, Editorial Colex.

FORNÉS DE LA ROSA, J. (1996). “Régimen jurídico patrimonial y financiación de la Iglesia desde la perspectiva de la libertad religiosa”, *Ius canonicum*, vol. 36, núm.71, Ciudad de México, IX Congreso Internacional de Derecho canónico sobre *La libertad religiosa*.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1988). “Presupuestos jurídico-constitucionales de la legislación sobre Patrimonio Histórico”, *Revista de Derecho Político*, núm. 27-28.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1997). “La protección jurídica del Patrimonio Cultural. Nuevas cuestiones y nuevos sujetos a los diez años de la Ley del Patrimonio Histórico Español”, *Revista de Patrimonio cultural y Derecho*, núm. 1.

GIANNINI, M.S.(2005). “I beni culturali”, *Revista de Patrimonio cultural y Derecho*, núm. 9.

GONZÁLEZ MERLANO, G.: “La protección del Estado a los bienes culturales privados. Aplicación a un caso concreto”, Consorcio Latinoamericano de Libertad religiosa, <http://www.libertadreligiosa.org/articulos/bienes culturales.pdf>

HERNÁNDEZ DÍAZ, J. (2013). “Derecho y cultura. Breve reflexión histórico jurídica”, *Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo*, núm. 13.

HERVADA, J. (1991). “La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico”, *Vetera et Nova, Cuestiones de Derecho canónico y afines*, tomo 1, Navarra Gráfica Ediciones.

HOLLIS, E. (2009). *La vida secreta de los edificios*, Madrid, Ediciones Siruela.

HUGHES, R. (1979). “Problemas en Utopía”, Documental nº4 de la serie *El impacto de lo nuevo* para la BBC2.

KOSTOF, S. (1977). *El Arquitecto: Historia de una profesión*, Madrid, Editorial Cátedra.

LÁZARO CARRETER, F. (1983). “Entre dos galaxias. Cultura del libro y cultura audiovisual”, *La cultura del libro*, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Ediciones Pirámide.

LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D. (2003). *Derecho de la libertad de conciencia, II. Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad*, Madrid.

- MAGÁN PERALES, J. M. (2005). "Protección de bienes culturales en tiempo de paz", *Revista Patrimonio cultural y Derecho*, núm. 9.
- MARTINELL SEMPERE, A. (2011). *La política cultural internacional: conceptos clave*, Madrid, Agencia española de Cooperación Internacional.
- MARTÍNEZ BLANCO, A. (1997). *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado Español*, vol. 13, Madrid, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Justicia de España.
- MESNARD, A.H. (1990). *Droit et politique de la culture*, Paris, Presses Universitaires de France.
- MOTILLA DE LA CALLE, A. (1995). *Régimen jurídico de los bienes histórico-artísticos de la Iglesia católica*, Madrid, Eurolex.
- MUÑOZ MERINO, A. (2001). *Medidas fiscales de protección del patrimonio histórico: dificultades aplicativas*, Madrid, Instituto Superior de Economía Local.
- OLSON, David R. (1998). *Desmitologización de la cultura escrita*, Madrid, Editorial Gedisa.
- PALOMO IGLESIAS, C. (1992). "Iglesia y Estado en materia de patrimonio cultural", *Patrimonio cultural, Documentación e Información*, núm. 15-16.
- PRATS, L. (1997). *Antropología y Patrimonio*, Madrid, Editorial Ariel.
- PRATS, L. (2005). "Concepto y gestión del patrimonio local", *Cuadernos de Antropología*, núm. 21.
- PRIETO DE PEDRO, J. (1993). *Cultura, culturas y Constitución*, Madrid, Congreso de los Diputados, Centro de Estudios Constitucionales.
- PRIETO DE PEDRO, J. (2002). "Cultura, economía y derecho, tres conceptos implicados", *Revista de Cultura, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura*, núm. 1.
- PRIETO DE PEDRO, J. (2005). "Diversidad y derechos culturales", conferencia pronunciada en el VI Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Inmaterial de los Países Andinos, Medellín.
- PRIETO DE PEDRO, J. y MARTINELL, A. (2007). "Documento de trabajo para la primera reunión de expertos sobre la cooperación internacional", UNESCO.
- REVERT, X. (2004). "El patrimonio cultural: entre los ciudadanos y su corresponsabilidad en la gestión", *Rehabilitación Patrimonio y Participación*, Valencia, Fundación Pere Compte.

- RUBIO AROSTEGUI, J.A., RIUS ULLDEMOLINS, J. y MARTÍNEZ ILLA, S. (2014). *El modelo español de financiación de las artes y la cultura en el contexto europeo. Crisis económica, cambio institucional, gobernanza y valor público de la cultura y la política cultural*, Madrid, Fundación Sociedad General de Autores Españoles, Alternativas, Observatorio de Cultura y Comunicación.
- REYES VIZCAÍNO, P.: “El derecho de las personas jurídicas en la Iglesia”, <http://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-de-personas/las-personas-juridicas-en-la-iglesia.html>
- RIEGL, A. (1987). “El culto moderno a los monumentos”, *La balsa de la medusa* núm. 7, Madrid, Editorial Visor.
- RODRÍGUEZ DOMINGO, J.M. (2009). *La gestión del patrimonio eclesiástico en el ámbito local*, Granada, Universidad Internacional de Andalucía.
- RODRÍGUEZ LAFUENTE, F. (2012). “Las máscaras de la cultura”, *Revista de Occidente*, núm. 378.
- STAMATOUDI, I. (2011). *Cultural property law and restitution. A commentary to international Conventions and European Union law*, Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, Edward Elgar Publishing Limited.
- TEJÓN SÁNCHEZ, R. (2005). “Los bienes culturales de interés religioso en la Ley de Patrimonio cultural de Castilla y León”, *Revista Patrimonio cultural y Derecho*, núm. 9.
- TEJÓN SÁNCHEZ, R. (2008). “Confesiones religiosas y patrimonio cultural”, Madrid, Ministerio de Justicia.
- VAQUER CABALLERÍA, M. (2005). “La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial”, *Revista museos.es*, núm. 1.
- VAQUER CABALLERÍA, M. (2013). “La relación entre cultura y mercado en el Derecho de la Unión Europea: de la excepción a la diversidad cultural”, *Cuadernos de derecho de la cultura*, núm. 2, Instituto interuniversitario para la comunicación cultural, Cátedra Andrés Bello de Derechos culturales.
- VELASCO MAILLO, H. (2006). “La cultura. Noción moderna”, *Revista Patrimonio cultural y Derecho*, núm. 10.
- VON SCHORLEMER, S. (2007). “Diversidad cultural y riqueza de Europa. Aplicación de la Convención de la UNESCO”, Essen, Consejo de la Unión Europea.
- VON KIRCHMANN, J.H. (1983). *La jurisprudencia no es ciencia*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.